

ARGELIA, TÚNEZ, MAURITANIA Y LIBIA DURANTE LOS AÑOS NOVENTA: ENTRE EL PLURALISMO AUTORITARIO Y EL OCASO DE LAS MASAS

Por MIGUEL HERNANDO DE LARRAMENDI

La década de los años 90 en el Magreb está caracterizada por la crisis de legitimidad de unos Estados-Nación que, cuatro décadas después de haber conseguido la independencia, se mostraron incapaces de hacer frente a las expectativas y demandas de unas sociedades en vertiginosa transformación.

Los diferentes regímenes, independientemente de sus orientaciones ideológicas, se encontraron sometidos a tensiones similares, como la crisis del Estado distributivo, el desarrollo del malestar social y la emergencia de formas de contestación liberal e islamistas. La respuesta a estos desafíos se produjo primero en el plano económico y luego en el plano político. La respuesta económica consistió en liberalizar la economía y aceptar —ante las presiones del FMI y del Banco Mundial— el desenganche parcial de la actividad económica de unos Estados hipertrofiados. El tránsito a opciones liberales en lo económico estuvo acompañado en lo político por el inicio de procesos “otorgados” de apertura con los que las elites dirigentes intentaban salvar unos regímenes contestados y preservar sus posiciones privilegiadas en los mismos.

El alcance de esos procesos fue limitado y varió de un país a otro impidiendo —salvo en Marruecos— la puesta en práctica de una alternancia política. En Argelia, Túnez y Mauritania se han afianzado unos “pluralismos autoritarios” que pese a su fachada pluralista se resisten a compartir el poder con otros sectores de la sociedad. Los regímenes magrebíes se han mostrado reacios a profundizar en un camino del que se beneficiarían



fundamentalmente los movimientos islamistas que se han consolidado en todos los países de la región, incluido Libia, como las movimientos que mejor canalizan los deseos de cambio de una población que en términos generales se ha empobrecido en una década en la que se han agudizado las desigualdades sociales.

Las expectativas de cambio con las que empezó la década (1) se desvanecieron rápidamente. El desencadenamiento de la guerra civil argelina influyó en la forma en la que el resto de regímenes gestionaron los procesos de transición política interfiriendo en las relaciones intermagrebíes y con la Unión Europea. Este factor junto a la crisis de Lockerbie y la no resolución del conflicto del Sáhara Occidental paralizaron el proyecto de integración regional que con el nombre de la Unión del Magreb Árabe habían lanzado los cinco jefes de estado magrebíes en 1989.

La reintegración de Libia a la sociedad internacional tras el acuerdo con Estados Unidos y Gran Bretaña para juzgar el caso Lockerbie, la llegada al trono de Mohamed VI en Marruecos y su voluntad de profundizar en la democratización del país y la dinámica conciliadora del nuevo presidente argelino Abdelaziz Buteflika han creado un nuevo contexto regional que genera posibilidades de cambio frente al inmovilismo de la década que ahora acaba.

Este artículo está consagrado a analizar la evolución política de Argelia, Túnez, Libia y Mauritania durante la década de los 90. El caso de Marruecos no es analizado debido a que las contribuciones de Bernabé López y Domingo del Pino en esta misma obra lo hacen con detalle.

ARGELIA: UN CONFLICTO CIVIL CON REPERCUSIONES REGIONALES

Argelia ha sido de los cinco Estados magrebíes el que sufrió una colonización más larga. Francia inició su presencia allí en 1830 y no le concedió la independencia hasta 1962 después de una larga guerra de liberación nacional. La experiencia colonial argelina no sólo se diferencia de la de sus vecinos magrebíes por la duración sino también por la intensidad

(1) Un reflejo de esas expectativas puede encontrarse en la obra *Elecciones, Participación y Transiciones políticas en el Norte de África* en la que se recogen los trabajos y debates del coloquio que con el mismo título organizó en mayo de 1990 el Seminario de Sociología del Mundo Árabe de la Universidad Autónoma de Madrid dirigido por Bernabé López García.

con la que fueron alteradas sus estructuras sociales así como por haber conocido un régimen jurídico diferente. Desde mediados del siglo XIX Argelia pasó a formar parte del territorio nacional francés, aunque los argelinos conocidos con el nombre de "musulmanes" no se convirtieron en ciudadanos franceses hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La consideración de los departamentos argelinos como territorio nacional de la República Francesa y la existencia de un importante colectivo de europeos asentados en el territorio contribuyó a que la experiencia descolonizadora argelina también fuera más cruenta y larga que la de Túnez y Marruecos. Argelia tuvo que arrancar la independencia a Francia por las armas entre 1954 y 1962 en una guerra que causó un millón de muertos.

El nacionalismo es la principal referencia ideológica de un régimen que reivindica su legitimidad en nombre de la revolución y de la memoria de los muertos caídos en la lucha por la independencia. El régimen argelino se sustentó en el Frente de Liberación Nacional, la burocracia y el ejército, desempeñando éste último un papel central en la vida política del país. Pese al mito de un estado unitario el poder aparecía ligado a la existencia de diferentes grupos que encontraban su razón de ser en la existencia de una jerarquía de relaciones personales. La potencia e importancia de cada uno de estos grupos o clanes estaba directamente relacionada con su capacidad para distribuir prebendas a sus integrantes así como para asegurarles la impunidad. Todas las organizaciones de tipo horizontal (sindicatos, unión de agricultores...) estaban dirigidas por cuadros que dependían de algún clan, perpetuando esquemas propios de una concepción patrimonial y clientelar de la vida política (Etienne 1986: 273-295).

Durante el mandato de Ahmed Ben Bella (1962-1965), la clase dirigente argelina estaba integrada por numerosos clanes y facciones, no teniendo ninguno de ellos el poder suficiente para dominar el sistema político en su totalidad. De 1965 a 1978 Argelia fue gobernada por un reducido grupo de personas, originarias del Este del país y que, al amparo de la figura de Huari Bumedian, coparon la dirección política del mismo. Durante este periodo la élite dirigente argelina se amplió configurándose como un "sistema tecnocrático", integrado tanto por los máximos responsables del cuerpo de oficiales como por los principales dirigentes de la organización del partido único (FLN), y por representantes de la burocracia civil que se había formado alrededor del Ministerio de Industria y de las principales empresas públicas (Yefsah 1982: 99-189).

La muerte de Huari Bumedian en diciembre de 1978, después de una larga enfermedad, planteó el problema de su sucesión sin que hubiera un

candidato designado para sustituirle. Ante esta situación, la cúpula del ejército impuso a uno de sus oficiales como sucesor de Huari Bumedian. Chadli Benyedid, miembro del Consejo Revolucionario desde 1965 y comandante de la región de Orán, fue ratificado por el congreso del FLN celebrado en enero de 1979 como el único candidato del partido para ocupar la presidencia de la República, al ser el oficial con mayor antigüedad y con el grado más elevado del ejército argelino.

Del modelo al contramodelo argelino

Las dificultades para obtener la independencia contribuyeron a convertir al pueblo argelino en uno de los grandes héroes de la lucha antiimperialista de los años sesenta igual que el pueblo vietnamita. El prestigio adquirido al final de una de las más largas guerras de liberación nacional contribuyó a alimentar el mito de un "modelo argelino" sustentado en la actitud revisionista que el nuevo Estado tenía ante la sociedad internacional. Argelia prestó durante los años sesenta y setenta un importante apoyo a los movimientos de liberación nacional que todavía luchaban por alcanzar su independencia ya fuera en el sudeste asiático o en el África portuguesa (Lassassi 1988). La diplomacia argelina fue especialmente activa en el Movimiento de los Países No Alineados y en las organizaciones internacionales impulsando numerosos proyectos tendentes a redefinir el marco de las relaciones internacionales superando la bipolaridad imperante en un contexto de Guerra Fría y reclamando un nuevo "Orden Económico Internacional" (Grimaud 1984: 293-309).

En el ámbito económico el "modelo argelino" se basó en la búsqueda de un desarrollo autocentrado con el que pretendía acabar con los lazos de dependencia económica con la antigua metrópoli y edificar un Estado nacional. Para alcanzar esos objetivos Argelia apostó por una estrategia industrialista que de acuerdo con su proyecto de un "Nuevo Orden Económico Internacional" intentaba evitar la extraversión de su economía mediante un desarrollo autocentrado basado en la creación de una "industria pesada industrializadora" convertida en motor del desarrollo económico. Esta estrategia, que requería grandes inversiones de capital, no fue financiada por la plusvalía nacional sino por la renta energética. Este modelo populista de desarrollo que pretendía evitar la dependencia económica acentuó, sin embargo, la dependencia tecnológica y también alimentaria al marginar al sector agrícola (Brahimi 1991: 87-249).

Desde 1965 la política económica argelina se basó en la planificación socialista y en el establecimiento de grandes empresas estatales entre las

que sobresalía la Sonatrach responsable de la gestión de los hidrocarburos, principal riqueza del país. Tras la llegada de Chadli al poder se iniciaron una serie de reformas económicas que sin cuestionar los fundamentos de esa política pretendían su reestructuración permitiendo una participación limitada del sector privado en la economía (Ayubi 1998: 540-542). Esta política económica fue financiada gracias a los ingresos procedentes de la exportación del petróleo y del gas natural (Dahmani 1999: 31-37). La renta energética, incrementada tras las crisis del petróleo de 1973 y 1979, permitió al régimen argelino financiar un pacto social tácito. El Estado aseguraba el bienestar, la seguridad, la educación y el empleo a cambio de la pasividad política de la población. Las altas tasas de crecimiento demográfico así como un rápido proceso de urbanización aceleraron durante los años setenta las transformaciones de la sociedad argelina (2). El relajamiento de los controles autoritarios tras la llegada de Chadli al poder favoreció la emergencia de nuevas demandas en algunos sectores de la sociedad: la minoría lingüística bereber reivindicó durante la primavera de 1980 sus derechos culturales negados después de la independencia en aras de la reafirmación de la identidad árabe del país cuestionada durante la colonización (Metref 1996: 25-30 y Benrabah 1999); algunos colectivos de mujeres se opusieron al nuevo código civil de 1984 que perpetuaba su condición de inferioridad y aparecieron los primeros grupos islamistas que cuestionaban la política religiosa del Estado y demandaban la aplicación de la *Charia* o ley islámica.

Mientras el régimen pudo asegurar el bienestar de la población las voces contestarias no abandonaron su carácter minoritario y se mantuvo la paz social. Sin embargo el repentino hundimiento del mercado del petróleo en 1986 (el precio del barril paso de 30 a 10 dólares) obligó a un reajuste en la estrategia económica que pasó por una reducción del gasto público en sectores y ámbitos socialmente sensibles dificultando la inserción laboral de una nueva generación de argelinos. En este contexto de desenganche de un Estado providencia que había cubierto las necesidades mínimas de la población es donde hay que insertar las revueltas de octubre de 1988, violentamente reprimidas por el ejército.

(2) En el momento de alcanzar la independencia la población argelina era de 10 millones. En el año 2000 superará los 30 millones. La esperanza de vida ha pasado de 47 años en 1962 a 67 años. La mortalidad infantil ha descendido desde el 16,8% hasta el 5,5%. La tasa de escolarización se ha incrementado desde el 25% en 1970 hasta el 70%. (Quandt 1999: 151).

La fascinación por el modelo argelino entre los medios progresistas europeos hizo que el desencadenamiento de la crisis que analizaremos en las páginas siguientes provocara un profundo estupor. ¿Cómo era posible que precisamente un país progresista como Argelia se viera inmerso en una guerra civil y estuviera sometido a la amenaza de creación de un Estado islámico? La inestabilidad política y el clima de violencia que ha conocido Argelia durante los años noventa ha contribuido a que la imagen internacional de Argelia cambiara convirtiéndose en un contramodelo para sus vecinos (Safir 1996: 140-142).

La revuelta de octubre de 1988 y la estrategia liberalizadora de Chadli

Ante el bloqueo del sistema político y social en el que se encontraban el régimen argelino tras la explosión social que sacudió al país en octubre de 1988 el presidente Chadli puso en marcha un proceso otorgado de apertura política, al que se oponía una parte importante del aparato del FLN, con el que intentaba superar el déficit de legitimidad puesto de manifiesto en los esloganes coreados contra su persona durante los disturbios (3).

La relegitimación de un régimen que, independientemente de su fachada constitucional, había desarrollado formas autoritarias de ejercicio del poder, fue buscada desde el propio sistema. La legitimidad del cambio democrático se convirtió en el eslogán utilizado por el presidente Chadli para pilotar una transición con la que aspiraba a perpetuarse en el poder. El inicio del proceso estuvo acompañado de medidas liberalizadoras en el ámbito político (indulto de la mayor parte de presos políticos) y de reformas institucionales y legislativas (reforma de la Constitución en 1989, elaboración de una nueva ley de partidos políticos y de prensa ...).

La institucionalización del pluripartidismo se tradujo en la atomización de la oposición al ser legalizadas varias decenas de partidos "laicos" y

(3) Gran parte de los esloganes coreados durante las movilizaciones de octubre estuvieron dirigidos contra el presidente Chadli: "¡Muera Chadli! ¡Abajo Chadli!". Aunque era cierto que personificaba a un Estado que no satisfacía las expectativas de la generación nacida tras la Independencia algunos análisis consideran que representantes de la vieja guardia del partido, ayudados quizás por la temida Seguridad Militar (SM) aprovecharon la ocasión para actuar contra Chadli. (Quandt 1999: 54-58).

(4) El islamismo en Argelia no es homogéneo sino que está fragmentado. El principal de todos ellos es el Frente Islámico de Salvación (FIS) creado en 1989 y dirigido por Abbasi Madani y Ali Belhay. A diferencia de este que agrupaba un amplio espectro de tendencias, el Movimiento de la Sociedad Islámica (Hamas) encabezado por Mahfud Nanah y el Partido de la Nahda Islámica dirigido por Abdallah Djeballah tenían una base social más limitada y estaban muy vinculados a la personalidad de sus fundadores (Kapil 1991: 103-111).

tres formaciones islamistas (4). La función asignada a estos partidos, sin gran clientela política, no era tanto la de la alternancia sino la de legitimar con su existencia y participación en los comicios electorales el proceso de cambio político puesto en marcha. La entrada de una oposición "laica" atomizada y sin gran raigambre en la escena política no pudo evitar que la lucha política se polarizase entre el FLN y el Frente Islámico de Salvación (FIS) que surge con fuerza tras los disturbios de octubre de 1989 convirtiéndose en la fuerza política que mejor canalizaba el descontento contra el régimen.

La legalización de los movimientos islamistas, principal fuerza socio-política con capacidad real de alternancia a través de las urnas, se convirtió en el principal test para conocer la voluntad real de apertura y de cambio del régimen durante 1989. La ley de partidos políticos contenía cláusulas selectivas que limitaban las posibilidades de legalización de aquellas formaciones asentadas sobre una base confesional, lingüística o geográfica. El contenido de esta ley fue la que permitió justificar, en marzo de 1992, la disolución del FIS, tres años después de haber obtenido su legalización en septiembre de 1989.

La legalización del FIS debe ser analizada a la luz de las luchas internas existentes en el FLN como una decisión personal del presidente Chadli para intentar consolidar su posición en el sistema. El FIS fue legalizado para desempeñar dos funciones principales: la primera de ellas servir de contrapoder al FLN, como medio para neutralizar a los poderosos adversarios de Chadli y la segunda, bipolarizar la escena política a fin de neutralizar a las otras fuerzas de oposición, marginándolas y desgastándolas en una arriesgada estrategia para romper el aislamiento del presidente.

Los riesgos de esta estrategia quedaron en evidencia cuando —a pesar de una ley electoral aprobada por una Asamblea dominada por el FLN y diseñada para favorecer al partido mayoritario— el FIS obtuvo una importante victoria electoral en las elecciones municipales argelinas celebradas el 15 de junio de 1990 consiguiendo canalizar el voto de castigo de la sociedad argelina al antiguo partido único (5). El nuevo test al que se

(5) El FIS obtuvo 4,3 millones de votos frente a 2,2 del FLN. Con el 33% de los votos y gracias a un sistema electoral que premiaba a los partidos mayoritarios el FIS obtuvo el control de la mayor parte de las comunas urbanas. El FLN obtuvo buenos resultados en el medio rural, en el sur y en el este del país región de la que procedía un gran número de oficiales del ejército (Fontaine 1990: 124-140 y Burgat 1990: 5-22).

enfrentó entonces no sólo el régimen argelino sino toda la región fue el de saber si se estaba dispuesto a aceptar una de las reglas básicas del juego democrático, permitiendo la alternancia en el poder después de una victoria electoral. La hipótesis de una República Islámica en Argelia ha condicionado desde entonces el proceso de apertura política argelina así como la forma en la que el resto de dirigentes magrebíes han abordado el “dossier islamista”.

El triunfo indiscutible del FIS en la primera vuelta de las elecciones legislativas celebradas el 26 de diciembre de 1991 —188 escaños sobre un total de 232 frente a 25 del Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) y 15 del FLN—, aunque perdió más de un millón de votos en relación a las municipales de junio de 1990, mostró los errores de cálculo del régimen argelino que había exagerado el desgaste del FIS durante su gestión municipal y durante la Guerra del Golfo y que reincidió manteniendo un sistema electoral mayoritario a dos vueltas que favorecía a la formación más votada que ya no era el FLN (6). También confirmó como el islamismo argelino era la tendencia política que mejor transmitía la idea del cambio y la que se percibía como más capaz de deponer el viejo orden postcolonial. El FIS encontró su clientela electoral en una nueva categoría social surgida a los pechos del desarrollismo económico, la de los jóvenes marginados, alfabetizados en masa después de la independencia, poco sensibles a la retórica nacionalista, que vivían en la periferia de las grandes ciudades y que contaban con escasas posibilidades de movilidad social.

Durante su corta vida legal el FIS demostró su capacidad para movilizar y canalizar el descontento de la sociedad argelina pero calculó mal su fuerza en relación con los militares. El ejército que se consideraba desde la independencia defensor de los ideales nacionalistas argelinos y de la unidad de la patria se sintió amenazado. La estrategia política del FIS basada en la desacreditación del régimen surgido tras la independencia y en una condena activa de la generalizada corrupción existente en el país contribuyó a que fuera percibido como una amenaza directa contra sus intereses corporativos lo que justificó su intervención directa en el proceso. Fueron las presiones del ejército las que empujaron en junio de 1991 al presidente Chadli a declarar el estado de excepción, a sustituir en la jefatura del gobierno a Mulud Hamruche por Sid Ahmed Ghozali así como

(6) El FIS obtuvo 3,2 millones de votos, el doble de los que consiguió el FLN. El FIS estaba en posición de ampliar su victoria obteniendo nuevos escaños en la segunda vuelta electoral (Fontaine 1992: 155-165).

a ordenar la encarcelación de Abbasi Madani y Ali Belhay, máximos dirigentes del FIS, después de que éstos desafiaran al régimen convocando una huelga general e indefinida percibida por los militares como una tentativa de hacerse con el poder sin pasar por las urnas.

El golpe de estado militar de 1992 y el desencadenamiento de la violencia

La aplastante victoria del FIS en la primera vuelta de las elecciones legislativas de diciembre de 1991 empujó a los militares a pasar al primer plano. Los generales Belkheir y Nezzar forzaron al presidente Chadli a dimitir, la segunda vuelta electoral fue aplazada *sine diem*, el FIS ilegalizado y un número importante de sus dirigentes y militantes confinados en "campos de seguridad" del Sáhara.

En esta primera fase los militares buscaron una autoridad de transición que actuara en nombre suyo creando un Alto Comité de Estado, órgano colegiado que debía guiar los pasos del país durante los dos años siguientes. El ejército, que se reservó el control de la defensa y la seguridad del país, recurrió a diferentes personalidades para ocupar su presidencia. El primero de ellos, Muhammad Budiaf, encarnaba la legitimidad nacionalista aunque tras la independencia del país se había exiliado en Marruecos donde vivía desde hacía 30 años. Asesinado en junio de 1992 en circunstancias no aclaradas fue sustituido por Ali Kafi quien designó primer ministro a Belaid Abdessalam, responsable de la política industrial argelina durante el período Bumedian y poco dispuesto a aceptar la receta liberal preconizada por el Fondo Monetario Internacional para inyectar nuevos fondos a una economía condicionada por el peso de su deuda exterior (Abdessalam 1989). En un momento en el que la situación securitaria del país se había degradado de forma importante los militares apostaron como sustituto en la presidencia del Gobierno por Reda Malek, ex-embaajador en Washington y París, con posiciones económicas más pragmáticas. Malek consiguió el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el reescalamiento de la deuda externa a cambio de aplicar las recetas macroeconómicas del Fondo Monetario Internacional lo que permitió mejorar la situación económica. La firma del acuerdo con el FMI acabó con el tabú del reescalamiento de la deuda externa proporcionando un balón de oxígeno a la economía argelina en la que el servicio de una deuda externa cifrada en 26.000 millones de dólares absorbía la práctica totalidad de los ingresos procedentes de las exportaciones de hidrocarburos. La liberalización de este sector y su apertura al capital extranjero se inscribían

en la estrategia del régimen de buscar una recuperación económica que estabilizara el país, reforzara su devaluada legitimidad y proporcionara al régimen recursos adicionales con los que financiar su política securitaria.

Durante este período, sin embargo, la situación securitaria del país se degradó notablemente. El golpe de estado de 1992 y la posterior ilegalización del FIS favoreció la radicalización y fragmentación del movimiento islamista. Los partidarios de un enfrentamiento armado se impusieron e impulsaron la creación del Movimiento Islámico Armado (MIA) transformado después en el Ejército Islámico de Salvación (EIS). A partir de 1993 comenzaron a surgir un pequeño número de Grupos Islámicos Armados (GIA) dirigidos por “emires” autoproclamados que reclutaban sus miembros entre los sectores marginales de los *bidonvilles* del Gran Argel. Muy motivados por la idea de combatir un régimen ilegítimo y no musulmán a través de la religión estos grupos propugnaban la *yihad* como estrategia para acabar con el régimen.

Desde finales de 1993 el clima de inseguridad y violencia se adueñó del país causando en los años de conflicto 100.000 muertos y 3.000 desaparecidos. Los grupos islamistas multiplicaron sus acciones contra las fuerzas del orden pero también contra ciudadanos extranjeros residentes en Argelia. Los grupos armados más radicales, los GIA, emprendieron una oleada de asesinatos selectivos contra aquellos sectores de la sociedad opuestos a sus tesis, intelectuales, mujeres y periodistas. La población civil también sufrió en sus carnes la violencia siendo objeto de matanzas colectivas, mutilaciones y degollamientos. Este incremento de la violencia islamista estuvo acompañado de una intensa represión por parte del ejército y de las fuerzas paramilitares que organizaron operaciones de represalia contra civiles, barrios y aldeas consideradas como feudos islamistas.

1997 y 1998 fueron los años de las principales matanzas colectivas, intensificadas durante el mes del ayuno, el Ramadán. Pese al discurso oficial que presentaba el terrorismo islámico como residual las acciones de los GIA se hicieron especialmente intensas en la llanura de la Mitiya provocando la muerte y mutilación de familias enteras. La incapacidad del Gobierno para proporcionar unas condiciones mínimas de seguridad a la población civil contribuyó a que las voces que acusaban al régimen de estar implicado en las matanzas y de animar las acciones de los GIA para así diabolizar al islamismo se hicieran más frecuentes. Esta espiral de violencia provocó el envío de varias misiones internacionales de observadores pese al rechazo nacionalista de un régimen que las consideró una injerencia en sus asuntos internos.

Ante esta oleada de violencia el ejército tardó en reaccionar. En un primer momento fue incapaz de combatir y prevenir eficazmente las acciones de estos grupos que actuaban como guerrillas. A partir de 1995 el ejército comenzó a llevar la lucha armada de un modo más eficaz pero también más brutal a través de sus unidades de élite conocidas como *ninjas*, utilizando la aviación, recurriendo al *napalm* y a las detenciones arbitrarias, a las torturas y a las ejecuciones sumarias (Martínez 1998: 229-259). Ante la intensificación de la violencia en 1997 el ejército se vio obligado a asociar a la lucha antiislamista a la población civil con objeto de garantizar la seguridad de las poblaciones rurales. Los llamados "grupos de legítima defensa" y las "milicias de patriotas", financiados y armados por el régimen desde 1994 vieron crecer su número.

El retorno del ejército a la gestión directa de la crisis

El clima de guerra civil en el que se encontraba el país empujó al ejército a pasar al primer plano situando en la cúpula visible del Estado a uno de sus miembros. En enero de 1994 el general Liamine Zeroual, que hasta entonces ocupaba la cartera de defensa, fue designado presidente de la República consagrando el retorno de los militares a la gestión directa del poder. El tecnócrata Mokdad Sifi sustituyó en abril de ese año a Redha Malek en la jefatura del gobierno.

Entre 1994 y principios de 1995 la cuestión central fue la de saber si era posible encontrar una solución política a la crisis. Zeroual apostó por una doble estrategia. Por un lado intensificó las acciones represivas contra los grupos islamistas pero manteniendo abierto el canal de los contactos secretos con los dirigentes encarcelados del FIS. La búsqueda de una solución pactada no provocaba la unanimidad sino que era rechazada tanto por los sectores más radicales del FIS como del ejército, los llamados erradicadores y acabaría provocando el alejamiento de la vida pública de Zeroual.

La estrategia negociadora con el FIS se sustentaba en el intento de que los dirigentes del partido pudieran arrancar una tregua y una interrupción de la violencia a los diferentes grupos armados islamistas. Durante las negociaciones se hicieron patentes las diferencias entre Abbasi Madani y Ali Belhay, dirigentes históricos del FIS encarcelados desde 1991, así como la escasa capacidad de influencia de éstos sobre los GIA. En julio de 1995 se interrumpieron los contactos responsabilizando el régimen a los dirigentes históricos del FIS del fracaso de las negociaciones.

Entretanto el resto de actores políticos no permanecieron pasivos y buscaron una salida a la crisis. Auspiciada por la comunidad católica de San Egidio representantes de la Liga Argelina de Derechos Humanos, del FLN, convertido en un partido de oposición, del Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) de Hocine Ait Ahmed, del Movimiento para la Democracia en Argelia (MDA) de Ahmed Ben Bella, del partido de los Trabajadores (PT) de Luisa Hanun así como algunos dirigentes del FIS en el exterior aprobaron en Roma en enero de 1995 una plataforma política reclamando el retorno a la legitimidad de las urnas y la búsqueda de una salida negociada a la crisis. Entre los puntos de aquel documento que mostraba los intentos de un sector del FIS por salir de su aislamiento a través de la vía política se encontraba el rechazo de la violencia como medio para alcanzar o mantenerse en el poder; la oposición a cualquier forma de dictadura, el retorno del ejército a los cuarteles, la liberación de los dirigentes del FIS y de todos los presos políticos y el fin de las ejecuciones extrajudiciales. Esta propuesta de apertura democrática fue ignorada por el régimen quien la descalificó considerando que el tiempo jugaba a su favor y que su gestión securitaria de la crisis le permitiría sobrevivir e imponerse. En su rechazo a esta propuesta contó con el apoyo de los partidos más críticos hacia las tesis islamistas como el RCD de Saad Saadi o el Tahadi que consideraron la Plataforma de Roma como una maniobra para ayudar al FIS.

Los intentos de institucionalización política del régimen

Desde su llegada a la presidencia de la República Zerual puso en práctica una política que buscaba restablecer la legitimidad institucional a través de las elecciones. Las diferentes formaciones políticas, aunque rechazaron participar en el “Diálogo Nacional” propuesto por la presidencia de la República, acabaron aceptando el proyecto de restablecimiento de la estabilidad institucional.

En noviembre de 1995 tuvieron lugar las elecciones presidenciales a las que concurrieron cuatro candidatos. Celebradas en un momento de calma y en un clima competitivo dieron una victoria creíble al general Zerual que obtuvo un 61% de los votos (7). Estos comicios, con el índice

(7) Cuatro candidatos obtuvieron el número de firmas suficientes requeridas por la nueva ley electoral para concurrir a las elecciones presidenciales. Junto a Liamine Zerual optaron a la más alta magistratura del Estado el dirigente de *Hamas* Mahfud Nanah, el secretario general del RCD, Saïd Saadi y Nuredine Boukrouh del islamizante Partido de la Renovación Argelina. Nanah obtuvo un 25,5% de los votos, Saadi el 9,6 y Boukrouh el 3,8 (Fontaine 1996: 107-118).

de participación más elevado desde las municipales de 1990, un 75,3%, pese al boicót del FIS, del FFS y del FLN que consideraron que el retorno de la paz debía preceder a cualquier acción electoral, legitimaron al nuevo presidente y generaron un clima de optimismo en la población que anhelaba una rápida salida de la crisis. Tras las elecciones se constituyó en diciembre de 1995 un nuevo gobierno presidido por Ahmed Uyahya en el que junto a tecnócratas del gabinete anterior participaron dos miembros del partido islamista *Hamas*, un disidente del FIS y un representante del Partido de la Renovación Argelina (PRA). La cartera de defensa seguía en manos de Zerual.

En noviembre de 1996 fue aprobada en referéndum pero sin gran entusiasmo una nueva Constitución que reforzaba los poderes presidenciales al otorgarle el derecho a designar una tercera parte de los miembros de una segunda cámara, el Consejo de la Nación, con competencias para censurar la labor de los diputados (Gourdon 1996: 36-48).

En junio de 1997, después de un período sangriento en el que las matanzas de civiles se habían multiplicado, se celebraron las elecciones legislativas en las que participaron todas las formaciones políticas salvo el FIS. Este proceso electoral fue presentado por el régimen como una muestra de su voluntad de salir de la espiral de violencia que sacudía al país. Para evitar sorpresas como las de 1991 el régimen obligó a los dos partidos de sensibilidad islamista a modificar su denominación: el Movimiento de la Sociedad islámica conocido por *Hamas* según sus iniciales en árabe pasó a denominarse Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP) y el partido de la Nahda islámica eliminó este último adjetivo de su denominación. También se optó por un sistema proporcional a nivel de Wilayas con el que evitar una aplastante mayoría de la fuerza más votada. La principal novedad de los comicios fue, sin embargo, la emergencia de un nuevo partido impulsado desde la presidencia de la República. El Reagrupamiento Nacional y Democrático (RND), creado cuatro meses antes, se alzó con la victoria obteniendo 155 escaños. Los partidos islamistas supieron canalizar una parte del anterior voto FIS y obtuvieron una cuarta parte de los sufragios. El MSP obtuvo 69 escaños y el Nahda 34. El FLN, con 64, quedó como tercera fuerza política del país. Los partidos berberistas FFS y RCD, obtuvieron 19 escaños cada uno (Djeral 1997: 149-180). Tras las elecciones se formó un gobierno de coalición presidido por Uyahya en el que los principales ministros conservaron sus carteras pero en el que se integraron miembros del FLN y del islamista MSP con cuatro ministerios y tres secretarías de Estado cada uno confirmando la cre-

acción de un polo islamo-conservador asociado por el régimen a la gestión gubernamental. EL MSP recibió el delicado ministerio de Industria y Reestructuraciones en un momento en el que la política de saneamiento de las empresas públicas iba a obligar a realizar millares de despidos.

Ese mes de octubre tuvieron lugar las elecciones locales y regionales argelinas con las que debía concluir el proceso de institucionalización política. Los resultados aseguraron al régimen el control de la vida política local a costa de restarle credibilidad en unos comicios sin observadores internacionales que dieron la victoria al RND y al FLN. Los electos locales y regionales fueron los encargados de elegir a 2/3 de los miembros del Consejo de la Nación, la segunda cámara creada en la Constitución de 1996. De los 96 escaños elegidos por sufragio indirecto en esta cámara 80 correspondieron al RND, 10 al FLN, 4 al FFS y 2 al MSP. Otros 48 escaños fueron otorgados por designación presidencial a personalidades próximas al régimen.

Las elecciones presidenciales de abril de 1999 y las perspectivas de una salida negociada para la crisis

La inesperada dimisión de Liamine Zerual en septiembre de 1998 obligó a los diferentes actores a reubicarse ante la elección de un nuevo presidente de la República. La dimisión de Zerual fue la consecuencia lógica de las desavenencias surgidas entre diferentes facciones de la cúpula militar argelina. Un sector de la misma encabezado por el general Lamari, jefe del Estado Mayor, y por Tawfiq Mediene responsable de la Seguridad Militar, veía con malos ojos los intentos del general Zerual de reforzar su autonomía frente al grupo de oficiales que le había designado buscando, sin el consenso de la cúpula militar, una salida negociada a la crisis. El presidente Zerual y su consejero, el también general Mohamed Betchine, habrían sido partidarios de un diálogo con el FIS que permitiera sentar las bases de una entente nacional tras seis años de guerra civil. Los generales Lamari y Mediene por el contrario formaban parte de la tendencia "erradicadora" partidaria de continuar la represión hasta el aniquilamiento del último islamista.

El clima de violencia salvaje que reinaba en el país durante el otoño de 1997 abrió una ventana de oportunidad para avanzar en la búsqueda de una salida negociada a la crisis. La escalada de horrores alcanzó principalmente aldeas y pequeñas poblaciones de los alrededores de Argel y de la zona este del país. Los ataques de los grupos armados causaron ver-

daderas carnicerías decapitando, mutilando o quemando vivos a mujeres y niños ante la pasividad del ejército lo que suscitó interrogantes sobre su actuación y de nuevo sobre las posibles implicaciones en las matanzas. Pese a las reticencias argelinas varias misiones de observadores y una delegación de la ONU visitaron el país durante 1998 para informarse sobre el terreno de las causas y los actores de la violencia. Intentando marcar las distancias frente a los GIA, presuntos responsables de las sangrientas matanzas de civiles, el FIS modificó su estrategia y anunció su disponibilidad para declarar un alto el fuego unilateral. En este contexto hay que insertar los gestos conciliadores de la presidencia de la República liberando a varios dirigentes del FIS, entre ellos a Abbasi Madani, trasladado a arresto domiciliario y apartando de la lucha antiterrorista a algunos oficiales partidarios de las tesis erradicadoras.

Las desavenencias en el seno del ejército se hicieron visibles cuando el alto estado mayor cortocircuitó las negociaciones entre el FIS y la presidencia de la República, alcanzando directamente un sorprendente compromiso de tregua por parte de Madani Mazrag máximo dirigente del Ejército Islámico de Salvación, brazo armado del FIS. Las diferencias entre ambos clanes, filtradas a la prensa, se hicieron especialmente intensas durante el verano de 1998 cuando Zerual y Betchine sufrieron una campaña de desprestigio mediático con acusaciones de fraude en el proceso electoral que le había llevado a la presidencia o con denuncias sobre los negocios turbios de Betchine.

La dimisión de Zerual confirmó una realidad no explicitada jurídicamente y negada por la cúpula militar: el ejército está en Argelia por encima de la presidencia y niega al Gobierno la autoridad necesaria para la dirección del Estado (8). La crisis desencadenada por la dimisión de Zerual mostró no sólo las contradicciones internas de un régimen fragmentado y dominado por los intereses personales sino también la fragilidad del entramado constitucional puesto en pie desde 1995 confirmando la necesidad de encontrar una solución pactada sin excluir a ningún grupo (Martín 1999: 61-62).

La división del ejército impidió como siempre había ocurrido antes que la cúpula de oficiales designara un candidato único. Este hecho contribuyó, sin duda, a dar mayor credibilidad a la elección presidencial ani-

(8) Véase Lahourari Addi, "L'armée algérienne se divise" en *Le Monde Diplomatique*, n.º 540 (marzo de 1999), pp. 8-9.

mando a siete candidatos a presentar las 75.000 firmas de apoyo necesarias para poder concurrir al mismo. Entre los siete candidatos sólo Ait Ahmed representaba a su partido el FFS. El resto eran independientes aunque había tres militantes del FLN que reclamaban el apoyo del antiguo partido único (Mulud Hamruche, Ahmed Taleb Ibrahimi y Abdelaziz Buteflika). Ahmad Djbala, fundador del partido islamista de la Nahda, no contó con el apoyo de esta formación de la que se había autoexcluido presentándose como independiente igual que el ex-primer ministro Sifi Mokdad y el responsable de la IV *wilaya* durante la guerra de liberación nacional, Jatib Yusef (Amina 1999: 20-23).

La candidatura de Abdelaziz Buteflika, ministro de asuntos exteriores durante el período Bumedíán y artífice del prestigio internacional de Argelia en aquella época, fue a la que el régimen decidió dar su apoyo al ser el que mejor se acercaba a los “criterios de gobernabilidad” considerados como indispensables por la cúpula militar. Buteflika contó con el apoyo del sector no erradicador del ejército, con el de la seguridad militar y con el de cuatro partidos próximos al régimen el FLN, el RND, el *Nahda* y el MSP (9).

Las elecciones marcaron el retorno, todavía no oficial, del FIS a la vida política. Por primera vez tras el golpe de estado de 1992 no boicoteó el proceso sino que recomendó el apoyo a uno de los candidatos independientes, Ahmed Taleb Ibrahimi, hijo de un dirigente de la Liga de Ulemas Argelinos y responsable de la política de arabización durante el período de Bumedíán. Taleb Ibrahimi, partidario desde el inicio de la crisis de un estrechamiento de los lazos entre el FLN y el FIS, podía desempeñar una labor mediadora entre el FIS y el régimen.

Las acusaciones de fraude masivo en los colegios electorales itinerantes del sur del país y en las votaciones celebradas en el extranjero fue el argumento invocado por seis de los candidatos para anunciar conjuntamente su retirada del proceso un día antes de la celebración general de los comicios. La negativa del Gobierno a retirar las papeletas de los candidatos invocando impedimentos legales y el reparto oficial de votos otorgan una credibilidad limitada al proceso. Según los resultados oficiales Abdelaziz Buteflika habría obtenido el 75,9% de los votos. El resto de can-

(9) El apoyo del MSP a Buteflika sólo llegó después de que fuera desestimada la candidatura de su líder, Mahfud Nanah, al no poder acreditar su participación en la guerra de liberación nacional. El apoyo a Buteflika no contó con la aquiescencia de todos los sectores del partido.

didatos no habrían logrado alcanzar entre todos ellos el 25% de los sufragios. Taleb Ibrahimí habría obtenido el 14% y Abdallah Djaballah el 3,9%. La tasa de participación oficial fue del 60,2% (10).

Abdelaziz Buteflika llegó a la presidencia de la República debilitado por el boicot del resto de candidatos al proceso. Su principal objetivo desde entonces ha sido buscar una fuente de legitimidad propia que reforzara su posición en el sistema y le permitiera ensanchar su margen de autonomía respecto al ala del ejército y a las fuerzas políticas que le habían apoyado en las elecciones y de las que dependía en el Parlamento.

Durante la campaña electoral sus llamamientos a una reconciliación nacional le habían permitido conectar con la aspiración compartida de la población argelina de restablecer la paz y la seguridad en el país. Desde su llegada al poder Buteflika va a transformar ese objetivo en el eje central de su acción de gobierno defendiendo que la batalla contra la violencia islamista no debe limitarse a la acción represiva sino que debe ir acompañada de una política de mano tendida. En ese marco hay que insertar varias medidas: el acuerdo definitivo de abandono de la violencia con el brazo armado del FIS, cuyo máximo dirigente ofreció en junio la colaboración del EIS en el combate contra los GIA; la amnistía concedida a principios de julio a miles de islamistas que no estuvieran implicados en delitos de sangre así como la "ley de concordia civil" que ofrece la reinserción condicional a los islamistas no implicados en asesinatos colectivos, violaciones o atentados en lugares públicos que se entreguen a las autoridades antes del 13 de enero de 2000. 300 islamistas habrían solicitado acogerse a los beneficios de esta ley en septiembre de 1999 (11). Esta política conciliadora ha sido complementada con la oferta realizada al FIS para que volviera al juego político con una nueva denominación y sin la participación de sus dirigentes históricos Abbasi Madani y Ali Belhay (12).

La aprobación parlamentaria y la entrada en vigor de la "ley de concordia civil" no ha impedido a Buteflika organizar en septiembre de 1999 un referéndum sobre la misma con el que pretendía hacer olvidar las condiciones controvertidas de su elección. La pregunta formulada en la consulta ("¿Está a favor o en contra de la iniciativa del presidente de la Repú-

(10) Véase *Elecciones presidenciales en Argelia, 15 de abril de 1999*, CERI, Madrid 1999.

(11) *Le Monde*, 18/9/1999, p. 3.

(12) Véanse las declaraciones del presidente argelino al *Financial Times* citadas por ABC, 20/7/1999, p. 37.

blica tendente a la realización de la paz y la concordia civil?") vinculaba directamente la paz y la reconciliación nacional a su persona. Ningún partido pidió el no en una votación que contó con una tasa de participación del 85% y en la que la "ley de concordia civil" fue plebiscitada con un 98,6% de los votos. La intensidad de la violencia se ha reducido notablemente desde el inicio de este proceso aunque algunos grupos de los GIA han continuado cometiendo atentados fundamentalmente contra miembros de las fuerzas de seguridad.

Abdelaziz Buteflika no sólo pretende la vuelta a la normalidad en el interior del país sino también restablecer el peso que durante los años setenta tuvo Argelia en la esfera internacional. El ex-ministro de asuntos exteriores de Bumedíán ha aprovechado la celebración en Argel de la cumbre de la Organización para la Unidad Africana para mostrar simbólicamente la voluntad de Argelia de salir de su aislamiento internacional y regional. La presencia del presidente argelino en los funerales de Hasán II muestra la voluntad de Buteflika de normalizar las relaciones con Marruecos y relanzar el proceso de integración regional.

¿Conseguirá Buteflika encontrar un margen de autonomía que le permita ejercer los amplios poderes que la Constitución de 1996 otorga al presidente de la República? Las tentativas anteriores de Budiaf o Zerual no incitan al optimismo. La incapacidad de los grupos islamistas para derribar el régimen no ha impedido, sin embargo, la consolidación en los diferentes procesos electorales de una cuarta parte del electorado argelino en posiciones cercanas al islamismo (este porcentaje podría aumentar si volviera a participar en los mismos el FIS). Esta realidad sociológica excluye cualquier salida de la crisis que no sea política y pactada si se pretende acabar con lo que el régimen argelino continúa denominando "violencia residual" y restablecer una convivencia nacional que favorezca la estabilidad y atraiga las inversiones necesarias con las que sentar las bases de una economía productiva menos dependiente de los vaivenes del mercado de los hidrocarburos que permita mejorar una difícil situación económica que puede provocar estallidos sociales. Una parte del ejército lo había comprendido asociando al ejercicio del poder a los grupos islamistas legales (MSP y *Nahda*). La estrategia conciliadora de Buteflika coincide en muchos aspectos con las propuestas del Pacto de San Egidio rechazadas en 1995 por la inmovilista cúpula militar. Un pacto o contrato nacional que restablezca la confianza podría proporcionar estabilidad a una sociedad más plural de lo que el discurso oficial homogeneizador pretende. La superación de una cultura de la violencia

percibida por algunos sectores marginales como una forma de movilidad social (Martinez 1998: 369-377) puede no ser una tarea fácil en un país en el que una parte de la población civil ha sido armada por el Gobierno. Las dificultades del presidente Buteflika cinco meses después de su llegada a la presidencia para formar Gobierno o la resistencia de la cúpula militar argelina hacia su política de normalización con Marruecos reflejan, como nos lo ha demostrado la reciente historia del país, que la actitud del ejército será en cualquier caso decisiva y condicionará el éxito de la estrategia de Buteflika.

TÚNEZ: ENTRE EL ÉXITO ECONÓMICO Y EL AUTORISMO PRESIDENCIALISTA (13)

Entre los estados del Magreb Túnez es el que goza de una mejor imagen internacional como país estable y seguro donde se puede disfrutar de unas económicas vacaciones o donde se puede invertir gracias a su estabilidad política y a sus posibilidades de crecimiento. Frente a la guerra civil argelina las autoridades tunecinas, igual que las marroquíes, se presentan como modelos de estabilidad y éxito económico. Expresiones como la “Suiza del Magreb” o el “Singapur del Mediterráneo” han sido utilizadas por el presidente Ben Ali para resaltar el éxito del “milagro tunecino” con elevadas tasas de crecimiento económico que han permitido en los últimos años la mejora del nivel de vida de la población. Estos resultados han sido aplaudidos tanto por las instituciones financieras internacionales como por la Unión Europea que ha escogido a Túnez para ensayar su nueva política mediterránea definida en la Conferencia de Barcelona de 1995 mediante la firma de un Acuerdo de Asociación que prevé en el horizonte del 2010 la creación de una zona de libre comercio.

Esta buena imagen internacional no se ha visto afectada por el reforzamiento del carácter autoritario del régimen. Bajo una fachada pluralista la oposición legal ha sido amordazada, se ha reforzado el carácter hegemónico del Reagrupamiento Constitucional y Democrático (RCD), verdadero partido-Estado, y se ha reforzado el carácter policial del régimen denunciados por organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch: los arrestos arbitra-

(13) El análisis del caso tunecino se inspira ampliamente en mi trabajo “*Luces y sombras del modelo tunecino*”, *Meridiano CER*, n.º 25, (1999), pp. 24-28.

rios contra dirigentes de la oposición, la censura de la prensa y la tortura se han hecho cada vez más frecuentes. Este endurecimiento es justificado por el régimen como la única alternativa posible para asegurar una estabilidad que asegure prosperidad e impida a Túnez caer en la espiral de violencia y enfrentamientos civiles que conoce su vecina Argelia. La difícil conciliación entre el respeto a los derechos humanos y las necesidades de la represión antiislamista caracterizan la vida política tunecina de los últimos años. Pese a la inquietud manifestada por el Parlamento Europeo en mayo de 1996 ante el “inquietante deterioro de la situación de los derechos humanos”, Túnez sigue siendo percibido por los países occidentales como un polo de estabilidad en una región percibida a través del prisma argelino.

Del Burguibismo al Benalismo: el “golpe de estado constitucional” del 7 de noviembre de 1987

En 1987, 30 años después de que Habib Burguiba llegara a la presidencia de la República, Túnez se encontraba sumido en un clima de desencanto. La senilidad de un presidente vitalicio obsesionado desde mediados de los años ochenta en combatir al Movimiento de la Tendencia Islámica y las incertidumbres de un proceso sucesorio caracterizado por las “intrigas palaciegas” de la clase dirigente tenían sumido al país en un clima de parálisis y desesperanza teñida de dificultades económicas debido a la caída del precio del petróleo y al descenso de las remesas enviadas por los emigrantes.

En este contexto el 7 de noviembre de 1987 un equipo médico incapacitó para el ejercicio de sus funciones al Presidente Habib Burguiba, artífice de la modernización del país. En virtud de la Constitución le sucedió en la jefatura del Estado el primer ministro, el general Zine el Abidine Ben Ali, acabando con lo que el sociólogo tunecino Abdelkader Zghal calificó como la “última república civil del mundo árabe”. El nuevo presidente aprovechó el caudal de legitimidad generado por el cambio para poner en marcha un programa de apertura política y liberalización económica en un momento en el que gran parte de los regímenes de partido único iniciaban transiciones hacia el pluripartidismo.

Este programa de “regeneración nacional”, explicitado en la “declaración del 7 de noviembre”, fue acompañado de una serie de medidas liberalizadoras que contribuyeron a crear un nuevo clima de confianza en el país: la presidencia vitalicia fue eliminada en la Constitución de julio de

1988, centenares de presos políticos fueron liberados —entre ellos Rachid Gannuchi máximo dirigente del Movimiento de la Tendencia Islámica—, la legislación de excepción fue suprimida. Para mostrar simbólicamente su voluntad de cambio democrático el presidente Ben Ali incluyó en el gobierno a varios dirigentes de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, permitió el regreso de numerosos exiliados del período burguibista, promovió la ratificación de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos así como la apertura en Túnez de una sección nacional de Amnistía Internacional. También fueron aprobadas una nueva Ley de prensa y una Ley de partidos políticos que consagraba el pluripartidismo pero que limitaba las posibilidades de inserción en el sistema de aquellas formaciones que hicieran alguna referencia al Islam en su denominación. Junto al Reagrupamiento Constitucional y Democrático (RCD) —heredero del PSD, antiguo partido único— y al Movimiento de los Demócratas Socialistas (MDS), Ettaydid (heredero del antiguo partido comunista tunecino) y el Partido de Unidad Popular (PUP), creados durante el efímero experimento de apertura política puesto en marcha por Bourguiba a principios de los años ochenta, fueron legalizados otros tres nuevos partidos políticos: la Unión Democrática Unionista (UDU), el Reagrupamiento Socialista Popular (RSP) y el Partido Social Liberal (PSL).

Estos siete partidos tomaron parte en las elecciones legislativas del 2 de abril de 1989. El Movimiento de la Tendencia Islámica también concurrió a las elecciones presentando listas independientes en espera de que fuera aceptada su petición de legalización con una nueva denominación —partido de la Nahda— que eliminaba las referencias al islam. Los resultados clarificaron el mapa electoral mostrando una bipolarización entre el RCD, que obtuvo los 141 escaños en disputa y el 79,5% de los votos, y el partido de la Nahda, que sin obtener ningún escaño debido al sistema electoral de lista mayoritaria a una vuelta recogió el 14% de los votos pese a no presentar candidaturas en todas las circunscripciones del país. El resto de partidos de la oposición laica no llegaron a obtener entre todos ellos el 5% de los votos (Hernando de Larramendi 1991: 312-319).

La crisis argelina y el reforzamiento autoritario del régimen

La negativa a legalizar al partido de la Nahda, principal fuerza política con posibilidades de alternancia, mostró los límites del proceso de apertura política iniciado tras la llegada al poder de Ben Ali. La sólida implantación electoral y espacial del partido islamista en las elecciones legislati-

vas de abril de 1989 en las que, pese a no presentar en sus listas a ninguno de sus principales dirigentes, llegó a obtener en la periferia de algunas ciudades —incluida la capital— un porcentaje de votos cercano al 25%, y el deterioro de la situación en Argelia tras la victoria del Frente Islámico de Salvación (FIS) en la primera vuelta de las elecciones legislativas de diciembre de 1991 empujaron al régimen de Ben Ali a modificar su estrategia frente al movimiento islamista tunecino optando por la vía de la confrontación: la solicitud de legalización del partido de la Nahda fue definitivamente rechazada y los dirigentes de la organización comenzaron a ser perseguidos y encarcelados siendo acusados de conspirar contra la seguridad del Estado. La débil oposición legal aceptó las limitadas posibilidades de inserción en el sistema que le ofrecía el régimen prestando a cambio su apoyo tácito a la manera de gestionar el dossier islamista.

La guerra civil en Argelia acrecentó el temor a un contagio islamista legitimando la deriva autoritaria de un régimen que justificaba el reforzamiento del control policial del país y las crecientes restricciones a la libertad de expresión y asociación como la única vía posible para combatir y contener el peligro islamista al que se enfrentaba su vecina Argelia. La represión contra los islamistas es presentada por las autoridades como una medida necesaria para “proteger la democracia” (Grimaud 1995: 389-402).

La libertad de expresión y de acción política van a estar supeditadas a la seguridad. Para el benalismo, prolongación del presidencialismo burguibista, la seguridad —aún a costa del respeto a los derechos humanos— es garantía de estabilidad política y por tanto de prosperidad económica. La crisis argelina se convierte en la principal coartada que legitima el reforzamiento del carácter autoritario del régimen. Ben Ali tiene un estilo de gobierno personalista y se apoya en las fuerzas de seguridad, que en los últimos años han visto multiplicados por cuatro sus efectivos, lo que le da mayor autonomía frente al Reagrupamiento Constitucional y Democrático, en el que gradualmente emerge una nueva generación de tecnócratas que deben su posición al presidente. Para Ben Ali la democratización es un proceso lento y gradual que exige la educación de la población en la responsabilidad y los deberes que acompañan a los privilegios de la ciudadanía (Murphy 1997: 114-122).

La gestión del dossier islamista

La gestión del dossier islamista ha estado acompañada desde 1987 de una serie de medidas que perseguían arrebatar al partido de la Nahda el

monopolio de la legitimidad religiosa así como privarle de sus principales vías de implantación social.

Desde su llegada al poder Ben Ali marcó cierta distancia frente al laicismo de Bourguiba. Sin cuestionar el avanzado Código de Estatuto Personal el nuevo presidente promovió una serie de medidas intentando reapropiarse del espacio y del discurso religioso. En los primeros meses de su mandato Ben Ali realizó la peregrinación a La Meca, reabrió la universidad religiosa de La Zaytuna y autorizó la retransmisión por televisión de las cinco llamadas a la oración.

En el plano educativo impulsó una reforma educativa que acometió la reforma de los manuales escolares eliminando de los mismos las visiones tradicionales y las formulaciones dogmáticas de los principios del Islam.

La amenaza integrista también ha actuado como un revulsivo para atenuar las desigualdades sociales. En el plano social Ben Ali, consciente de que las formaciones islamistas suelen reclutar a gran parte de sus seguidores entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad, impulsó en 1993 la creación de un Fondo de Solidaridad Nacional destinado, según la Ley de Finanzas de 1993, a “financiar las intervenciones decididas por el Jefe del Estado a favor de las categorías sociales con un nivel de renta bajo y de las aglomeraciones desprovistas de las infraestructuras básicas” (Zamiti 1998: 708). La creación de este Fondo, alimentado por las aportaciones de las empresas públicas y privadas y de los ciudadanos en la cuenta corriente 26/26, tenía una clara dimensión política intentando transmitir el compromiso del Presidente en su lucha contra la pobreza. Ben Ali suele visitar los barrios y regiones menos desarrolladas decidiendo las posibles actuaciones. Los ingresos generados por los conciertos de Michael Jackson o Gilbert Beaud fueron destinados al Fondo reforzando el prestigio del programa. Desde su creación el Fondo ha distribuido 13.000 viviendas y de aquí al año 2000 se habrán beneficiado del mismo 176.000 familias, es decir cerca de un millón de tunecinos. Luchando de esta forma contra la pobreza y la exclusión el gobierno no sólo intenta limitar el coste social de las políticas liberales sino que también intenta combatir eficazmente el islamismo en uno de los espacios donde éste se mueve con mayor soltura.

El deterioro de la situación de los derechos humanos

Desde su llegada al poder el régimen de Ben Ali concedió gran importancia a la problemática de los derechos humanos. La asunción de este

discurso perseguía legitimar al nuevo presidente de cara a la opinión pública nacional, tras los excesos del último período burguibista, y ante la sociedad internacional en un contexto de cambios a escala regional y global (Feliú 1997: 141-167).

Igual que otros países de la región el régimen tunecino apostó por nacionalizar el dossier y promover una extensa “burocracia de los derechos humanos” vinculada al ejecutivo —como el Comité Superior de los Derechos Humanos y de Libertades Fundamentales— al tiempo que intensificaba sus intentos de domesticación de la independiente Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH), organización pionera en el mundo árabe que se había significado por su activa defensa de las libertades públicas durante los últimos años del período burguibista.

Desde principios de los años noventa la práctica cotidiana contradice la retórica oficial de defensa de los derechos humanos. A la represión contra los islamistas iniciada en 1991 se van a unir las persecuciones y el acoso contra aquellas militantes de la LTDH y de los partidos de la oposición que cuestionan o critican la política presidencial. En 1992 fue modificada la Ley de Asociaciones en una maniobra que perseguía neutralizar a la LTDH que desde hacía unos meses denunciaba “el deterioro sin precedentes” del ejercicio de las libertades fundamentales y el “creciente recurso a la práctica de la tortura”. Después de su disolución temporal la Liga Tunecina de Derechos Humanos adaptó sus estatutos a la nueva legislación en 1994 pero quedó debilitada por el acoso a sus miembros y las restricciones impuestas a sus actividades. En septiembre de 1997 su vicepresidente Khemais Ksila fue condenado a tres años de cárcel acusado de alterar el orden público después de que difundiera un comunicado en el que denunciaba el acoso al que estaba sometido y la violación de los derechos humanos en el país.

La represión contra la oposición laica, que había mostrado un apoyo tácito a la represión contra los islamistas, se hizo especialmente intensa en 1995 poco después de que Mohamed Moadda, secretario general del MDS, enviara al presidente de la República un memorándum en el que denunciaba que “Túnez vivía una vuelta al partido único hegemónico y dominador” y acusaba al régimen de utilizar el miedo al islamismo para justificar su autoritarismo. En febrero de 1996 fue condenado a 11 años de cárcel acusado de mantener relaciones comprometedoras con Libia. Khemais Chemari, miembro del buró político del MDS y ex-secretario general de la LTDH, fue condenado en julio de 1996 a cinco años por divulgar “secretos de Estado”. Los dos gozan desde diciembre de 1996 de liber-

tad condicional concedida por el Presidente de la República sin posibilidad de ejercer ninguna actividad política.

Un pluralismo otorgado

Sin cuestionar los fundamentos autoritarios del régimen, el presidente Ben Ali se ha esforzado por contrarrestar la imagen negativa que de ello se derivaba a través del reforzamiento de la fachada pluralista de las instituciones y de los procesos electorales.

La ausencia de diputados de la oposición en el Parlamento elegido en 1989 había dotado a la cámara de diputados de un monolitismo poco acorde con la imagen democrática que el país se esforzaba en presentar. Ante la necesidad de dar cabida en el Parlamento a una oposición laica, debilitada y sin gran base social, sin poner en peligro la hegemonía del RCD se recurrió a realizar una modificación parcial de la Ley Electoral que muestra las prevenciones del régimen ante un juego político abierto y competitivo. El sistema electoral de lista mayoritaria a una vuelta que favorece al partido mayoritario —el RCD— es mantenido en 144 de los 163 escaños. Para facilitar la entrada de las fuerzas políticas de oposición en el Parlamento se introduce una enmienda que prevé el reparto proporcional a nivel nacional de los otros 19 escaños entre aquellos partidos que no hayan obtenido ningún diputado. Gracias a esta cuota se garantizaba el carácter multicolor de la cámara de diputados desviando la competición electoral entre los seis partidos de la oposición. En las elecciones legislativas de mayo de 1994 el MDS consiguió 9 diputados, Ettajdid 4, el PUP y la UDU 3 respectivamente. Sin embargo en las elecciones municipales celebradas en mayo de 1995 la oposición sólo obtuvo seis concejales y perdió el único ayuntamiento que controlaba.

Para “hacer avanzar el proceso pluralista” el presidente Ben Ali coincidiendo con el décimo aniversario de su llegada al poder anunció una nueva reforma de la Ley Electoral que permitiría a la oposición disponer en las elecciones legislativas del 24 de octubre de 1999 de al menos el 20% de los escaños del Parlamento mediante el aumento del número de escaños que se disputarían a nivel nacional con un sistema proporcional. Un mecanismo similar será introducido para asegurar la presencia de la oposición en el poder municipal.

Coincidiendo con las elecciones legislativas tendrán lugar las terceras elecciones presidenciales desde que Burguiba —quien todavía vive en

Monastir— fuera apartado del poder. En 1989 y en 1994 sólo presentó su candidatura Zine el Abidine Ben Ali quien fue plebiscitado con el 99% de los votos. Para corregir esta anomalía, impropia de un régimen que se define como democrático, el presidente de la República anunció en noviembre de 1998 una reforma limitada de la Constitución. Para poder ser candidato antes se exigía contar con el respaldo de 30 grandes electores (diputados o presidentes de Consejos Municipales). Disponiendo únicamente de 19 diputados y de ningún alcalde los partidos de la oposición tenían serias dificultades para presentar candidaturas. La reforma permite que puedan optar a la presidencia de la República los presidentes o secretarios generales de cualquier partido político a condición de que lleven un mínimo de cinco años en el cargo y de que su formación esté representada en el Parlamento. Esta modificación ha permitido presentarse como candidatos a los dos únicos dirigente que reúnen los requisitos exigidos: Mohamed Belhay Amor y Ahmad Tlili. Secretarios generales del PUP y de la UDU respectivamente que con un programa calcado al de Ben Ali declararon que concurrían de “manera simbólica”. Si tenemos en consideración el número de votos obtenidos a escala nacional por su formación así como la popularidad de sus líderes podremos comprender que sus posibilidades de éxito son bastante limitadas.

Este marco limitado perpetua el papel marginal de la oposición en el sistema y parece apuntar a que la función asignada por Ben Ali a estos partidos no es la de la alternancia sino la de legitimar a través de su existencia y cooptación el carácter democrático del Benalismo. En esta línea se inscribe la ley sobre financiación de los partidos políticos aprobada en 1997 que concede a cada partido representado en el Parlamento una suma fija de alrededor de 75 millones de pesetas anuales.

El reto de la zona de libre comercio

Desde su llegada al poder en 1987 el presidente Ben Ali aceleró el proceso de liberalización y apertura de la economía tunecina inspirado en las directrices marcadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los resultados han sido muy positivos. Entre 1987 y 1997 el PIB ha crecido una media anual del 4,3% pese a que hubo dos años de sequía. Esta tasa de crecimiento ha permitido a Túnez situarse a la cabeza de los países del Magreb con un PIB anual por habitante de 2.000 dólares, superior al de Argelia. La mitad del PIB está ligada a las exportaciones. El déficit corriente de la balanza de pagos ha caído al 3,5% del PIB. El desarro-

llo del sector turístico y las remesas enviadas por los emigrantes contribuyen al equilibrio de la balanza de pagos.

Los indicadores sociales también son buenos y por supuesto mucho mejores que los del resto de países del Magreb: la mortalidad infantil ha caído a menos del 30%, la tasa de crecimiento demográfico ha pasado del 2,4 al 1,7% y la pobreza ha retrocedido cinco puntos afectando al 6% de la población.

La mejora del nivel de vida de la población que ha acompañado a estos resultados económicos podría explicar el acomodamiento de la población al autoritarismo de un régimen que ofrece seguridad y bienestar a cambio de manos libres en los asuntos políticos.

Este relativo bienestar no puede ocultar sin embargo que Túnez se enfrenta los próximos diez años al reto de digerir el Acuerdo de Libre Comercio firmado con la Unión Europea y las transformaciones de todo tipo que le acompañan. El acuerdo abre a Túnez la vía de integrarse en el espacio económico euromediterráneo pero comporta el riesgo de deteriorar la situación social mientras los primeros resultados macroeconómicos se produzcan. El éxito depende de la rapidez y eficacia con el que las empresas tunecinas se adapten a la nueva situación y de la capacidad de las autoridades tunecinas para atraer inversiones extranjeras y gestionar los desequilibrios sociales que se deriven del proceso (Moroy 1998: 672-675).

LIBIA ANTE EL RETO DE LA REINTEGRACIÓN EN EL SISTEMA INTERNACIONAL

Libia es el único país magrebí que tras su independencia no ha seguido la senda del pluripartidismo. Ubicado al este de la región magrebí Libia actúa como espacio de transición entre el Magreb y el Oriente Medio. Varios factores han favorecido una evolución política y económica diferente a la de sus vecinos del Magreb.

Libia fue el único país magrebí que no fue colonizado por Francia sino por una pequeña potencia como Italia que perdió su imperio colonial durante la segunda guerra mundial. Después fue Protectorado británico hasta obtener su independencia bajo un régimen monárquico en 1951.

Junto a un pasado colonial diferente Libia dispone de importantes yacimientos de hidrocarburos. Esta economía rentista cuenta, además, con una población de 5,7 millones, mucho más reducida que la de la vecina Argelia lo que contribuye a que la renta per cápita de Libia sea la

más elevada del continente africano. El elevado excedente financiero procedente de las exportaciones de hidrocarburos ha sido destinado a financiar una política agrícola que persigue como objetivos estratégicos la autosuficiencia alimentaria aunque esté reñida con la rentabilidad económica (14), así como a la puesta en marcha de una industria petroquímica de transformación de los hidrocarburos con la que el régimen libio ha perseguido desde 1969 alcanzar su autonomía política y económica. La renta petrolera ha permitido al régimen libio asegurarse el consenso político interno gracias a una distribución bastante equitativa de la riqueza para tener una activa presencia en la escena internacional donde ha puesto en práctica una política de apoyo a los movimientos de liberación nacional así como de búsqueda de la unidad árabe.

Ha sido precisamente su activo papel en la esfera internacional lo que ha contribuido a deteriorar la imagen del régimen libio en Estados Unidos percibido como la encarnación de todo aquello que Washington detestaba en los asuntos internacionales: ayuda a grupos terroristas, oposición a una solución negociada en Oriente Medio y voluntad de debilitar las posiciones norteamericanas en el mundo. La conflictividad cíclica entre ambos países desde finales de los años setenta (crisis cíclicas en el golfo de Sidra (15), bombardeo sobre Trípoli y Bengazi en 1986) alcanza su punto culminante en 1991 cuando Libia es acusada de ser la responsable del atentado de Lockerbie que había acabado con la vida de todos los pasajeros del vuelo de la Panam que explotó en el aire cuando sobrevolaba esa ciudad escocesa. La imposición de sanciones por parte de la

(14) En este contexto se inscribe la construcción del "Gran río artificial" construido entre 1983 y 1994 por una compañía surcoreana. Este proyecto pretende transportar las aguas subterráneas situadas en el desierto libio al sur del país hasta el norte del país lo que debería permitir duplicar la superficie de tierras cultivables y disminuir la dependencia alimentaria del país. La rentabilidad de este faraónica obra de ingeniería civil dependerá de la duración efectiva de las reservas situadas en las capas fráticas del desierto. En 1991 la firma británica Brown & Root, responsable del estudio técnico de viabilidad, las evaluó en 400 años, sin embargo, expertos independientes redujeron la duración a 50 años (Hernando de Larramendi 1992: 488).

(15) El rechazo de Estados Unidos a la decisión unilateral de Trípoli de ampliar sus aguas jurisdiccionales incluyendo en las mismas el golfo de Sidra ha creado un foco de tensiones cíclicas entre ambos países. La presencia recurrente de navíos norteamericanos de la VI flota en esas aguas se ha saldado con escaramuzas armadas en algunas ocasiones. En 1981 dos cazas libios fueron abatidos por aviones norteamericanos; en 1986 los navíos de Estados Unidos destruyeron un puesto de defensa antiaérea en respuesta a los ataques libios.

ONU en 1992 se añadió a las que Estados Unidos y la Unión Europea habían establecido en los años 80 y convirtieron a Libia —igual que a Irak— en uno de los “Estados parias” de la postguerra fría. Su aislamiento internacional durante los últimos ocho años ha tenido importantes consecuencias empujando al régimen a hacer gala de grandes dosis de pragmatismo flexibilizando sus posiciones ante el reto de sobrevivir en un entorno internacional en transformación.

La entrega en abril de 1999 a la ONU de los dos ciudadanos libios acusados por la justicia escocesa de ser los responsables del atentado, el inicio del juicio en Holanda, el levantamiento de las sanciones de la ONU y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Reino Unido abren una nueva etapa que coincide con el trigésimo aniversario de la llegada al poder del coronel Muammar Gadafi en la que Libia se enfrenta al reto de reintegrarse al sistema internacional y de avanzar en el camino de la liberalización política y económica.

De la monarquía sanusí a la Yamahiriyya o el gobierno de las masas

Entre 1951 y 1969 Libia fue gobernada por el rey Idris I de la dinastía sanusí vinculado a la cofradía religiosa del mismo nombre que había desempeñado un activo papel en la lucha contra el colonizador.

El primero de septiembre de 1969 un grupo de 12 oficiales libres, muy influidos por el presidente Nasser y su ideología panarabista, se hicieron con las riendas del país tras un golpe de Estado. Los jóvenes militares encabezados por Muammar al-Gadafi reprodujeron en una primera etapa el modelo de partido único que el presidente Nasser había implantado durante los años 60 en Egipto. La *Unión Socialista Árabe*, a semejanza de su homónima egipcia, se convierte desde 1971 en el partido único mediador entre el *Consejo del Mando Revolucionario* y el pueblo encargado de avanzar en la puesta en marcha de una revolución nacionalista. Durante este período los bancos extranjeros son nacionalizados, el Estado asume el monopolio del comercio exterior y toma el control de las compañías petroleras.

Las resistencias internas a esos cambios desde dentro de la estructura burocrática heredada de la Monarquía contribuyeron a acelerar el proceso de reformas impulsadas por Gadafi, que fue adquiriendo un mayor protagonismo en la vida política del país, convirtiéndose desde el discurso de Zuara en 1973 en el ideólogo de una revolución basada en un sistema

político novedoso cuyas bases ideológicas quedarían recogidas en *El Libro Verde* publicado entre 1975 y 1978. La culminación de este proceso tuvo lugar en 1977 con el establecimiento de la *Yamahiriyya* o gobierno de las masas.

El pensamiento político de Gadafi

El proyecto político de Gadafi puede resumirse en la búsqueda de un objetivo fundamental: reunificar la Nación Árabe eliminando los vestigios de la dominación occidental entre los que sobresale la existencia del Estado de Israel. La puesta en marcha de una democracia directa con la que pretende vencer las resistencias internas que liberen a las “masas” de los obstáculos que los regímenes políticos introducen a su voluntad unitaria es el corolario en el ámbito político interno (Burgat 1996: 62-63).

La negación de la democracia representativa es el eje fundamental de la ideología de Gadafi recogida en *El Libro Verde*. En la primera parte del libro Gadafi presenta un modelo institucional piramidal organizado a partir de los *Congresos Populares de Base* reunidos sobre una base territorial (barrios y municipalidades) o sectoriales que reagrupan a la totalidad de los ciudadanos libios mayores de edad y de *Comités Populares*, sus instancias ejecutivas. Los miembros de *Comités Populares* no son elegidos ni disponen de un mandato representativo sino que están únicamente delegados para transmitir las decisiones de los escalones de base a las instancias superiores de coordinación. Los delegados de los *Congresos Populares de Base* se reúnen una vez al año en el seno de un *Congreso Popular General*, instancia legislativa suprema cuyos secretarios constituyen el Comité Popular General que realiza las funciones de Gobierno. Cada uno de los 15 *Comités Populares Generales Sectoriales* está dirigido por un secretario general que es el equivalente de un ministro.

En 1977 Gadafi promovió la creación de *Comités Revolucionarios* destinados a alentar la participación política en los *Congresos Populares de Base* y a defender la revolución (Mattes 1996: 89-111). Rápidamente se implantaron en el ejército, controlando los medios de comunicación y supervisando el funcionamiento del entramado institucional disponiendo de un aparato judicial propio, el Tribunal Revolucionario, que opera durante los primeros años de la década de los ochenta en condiciones particularmente arbitrarias. La mayor parte de sus miembros proceden de las capas más desfavorecidas de la sociedad por lo que su adhesión a estos comités representa para ellos una oportunidad de movilidad social

en la medida que pueden ser reclutados por el servicio diplomático, la administración o las empresas públicas.

Aunque no figure formalmente en la estructura del poder ejecutivo el coronel Gadafi, que se reserva desde 1986 el título honorífico de “guía de la revolución”, ejerce un poder real a través del control del ejército y del aparato de seguridad nacional y del control de los mecanismos de cooperación de los comités revolucionarios.

La segunda parte del *Libro verde* aborda la cuestión económica. El mismo principio de supresión de los intermediarios es aplicado al ámbito económico bajo el eslogan movilizador de “Asociados, no asalariados”. A partir de 1978 comenzó a aplicarse un proyecto de redistribución interna de la riqueza. Los Comités tomaron el control de las empresas privadas al tiempo que el comercio privado fue abolido.

El pensamiento político de Gadafi, de carácter neo-salafí, tiene una profunda base religiosa que se inscribe en la corriente reformista que pretende un retorno a los fundamentos del Islam intentando dar un significado al texto coránico conciliable con su proyecto político. El Gadafismo defiende un islam basado en el Corán desprovisto de todas las desviaciones y las interpretaciones múltiples introducidas por los ulemas. Las contradicciones existentes entre diversos hadices de la sunna o tradición islámica y el texto del Corán le llevan a defender que muchos de estos hechos y tradiciones atribuidas al profeta fueron introducidos posteriormente para servir a los intereses coyunturales de los actores políticos durante los primeros tiempos del Islam. Por lo tanto rechaza la *sunna* y la *Charia* o ley islámica y considera al Corán como única fuente normativa del derecho islámico lo que le ha granjeado la animadversión de los ulemas y también de los movimientos islamistas. Además Gadafi defiende una interpretación del código del estatuto personal más avanzada reivindicando el papel de las mujeres en la sociedad y oponiéndose —sin haberlo trasladado al ámbito legislativo— a la prohibición de la poligamia (Djaziri, 1996: 83-89). Libia es además el único país musulmán cuyo calendario no comienza con la hégira del profeta Muhammad de Medina a La Meca sino que lo hace desde la fecha de la muerte del profeta Muhammad.

La “primavera de Trípoli” y el inicio de una tímida apertura política y económica

Desde principios de los años ochenta varios factores empujaron al coronel Gadafi a poner en marcha un proceso de apertura política limitada

con el que intentaba hacer frente al creciente descontento interno fruto de la disminución de los ingresos procedentes del petróleo, al impacto social de la humillante derrota militar en el Chad y al electroshock que sobre el país tuvo el bombardeo británico y norteamericano de 1986 sobre las ciudades de Trípoli y Bengasi.

Entre 1982 y 1986 la caída del precio del petróleo y la depreciación del dólar redujeron los ingresos libios de 22.000 millones de dólares en 1986 a 10.000 en 1985. La cura de austeridad que acompañó a esta reducción drástica de los ingresos afectó a la credibilidad del régimen y a la forma como éste era percibido en los medios urbanos. El inicio de la austeridad postpetrolera estuvo acompañada de la expulsión en 1985 de los primeros contingentes de trabajadores extranjeros principalmente egipcios y tunecinos.

El bombardeo americano sobre Trípoli y Bengasi en abril de 1986 tuvo lugar en este contexto de dificultades financieras y provocó una profunda conmoción en Gadafi. El ataque fue efectuado en represalia por la presunta intervención de los servicios secretos libios en el atentado que costó la vida en una discoteca berlinesa a varios soldados norteamericanos (Flores 1998: 35-37). La débil movilización de la población libia ante el primer enfrentamiento directo con los Estados Unidos así como la limitada solidaridad recibida del mundo árabe y magrebí y la neutralidad soviética afectaron profundamente al coronel Gadafi cuya residencia recibió el impacto de las bombas provocando la muerte de una de sus hijas adoptivas. El *raid* norteamericano marca el inicio de una reevaluación y reposicionamiento en el plano interno y externo del régimen.

En su huida hacia adelante el régimen intensificó su implicación en la guerra civil chadiana con el objeto de preservar el control libio sobre la disputada franja de Auzu, rica en uranio. La humillante derrota del ejército libio a manos de las fuerzas chadianas de Hissene Habre tuvo importantes repercusiones no sólo en el ámbito interno sino en el realineamiento regional de Libia. La captura de soldados y oficiales de alta graduación, las pérdidas de equipamiento militar pero sobre todo la desertión de altos oficiales y de soldados de la tropa que se unieron a las fuerzas de oposición libias, que con apoyo norteamericano, intentaban desde Chad derrocar al régimen libio contribuyeron a acelerar el proceso de apertura política y económica a partir de 1987 con el que el régimen intentaba aliviar el creciente malestar popular y salvaguardar el sistema político.

En el ámbito económico Gadafi modificó su lectura de la doctrina económica recogida en el *Libro verde* y autorizó la reapertura del pequeño comercio, la reactivación de los zocos, el desarrollo de las actividades artesanales, levantó el monopolio sobre el comercio exterior, aceptó el desarrollo del sector turístico y puso en marcha una pseudo privatización de la pequeñas y medianas empresas que en poco tiempo llevó a que 4.000 empresas se acogieran al nuevo régimen *tacharukiyya*, parecido al de las cooperativas. El sector del petróleo y la industria pesada que generan la mayor parte de los ingresos continuaron bajo el férreo control estatal y la apertura de la economía libia al exterior sigue limitada a estos sectores (Djaziri 1996: 112).

Esta liberalización, especialmente visible en el comercio, mejoró considerablemente el ambiente interno del país y fue acompañado de una prudente apertura política. Las manifestaciones más visibles de esta *Perestroiska* (Vandewalle 1997: 268) consistieron en la limitación del poder de los Comités *Revolucionarios* que habían cometido importantes abusos y en la puesta en marcha de un proceso de institucionalización del poder y de la afirmación de algunos derechos individuales. En este marco hay que insertar la promulgación en 1988 de la *Carta Verde de la libertad y los derechos en Libia* que, por primera vez, codificaba una serie de principios jurídicos pero no otorgaba a los ciudadanos libios los derechos políticos o civiles contemplados tradicionalmente por el derecho internacional (16). Los Tribunales Revolucionarios fueron sustituidos por nuevos Tribunales Populares, varios centenares de presos fueron liberados después de que el coronel Gadafi, conduciendo un bulldozer, derribara los muros de la prisión central de Trípoli, las fronteras con Túnez fueron reabiertas y la oposición en el exilio fue invitada a retornar al país. Ese mismo año fue creado un "Premio Coronel Gadafi de derechos humanos". Estos gestos fueron contrarrestados rápidamente por otras medidas que limitaron el alcance del proceso.

(16) Argumentando que Libia era una *Yamahiriyya* en la que el pueblo ejercía el poder directamente Gadafi consideraba que algunos derechos y libertades eran innecesarios: no existía prensa libre porque los ciudadanos podían expresarse libremente en los *Congresos del pueblo*, ni tampoco existía derecho de huelga porque los libios eran propietarios de las fábricas en las que trabajaban. Tampoco se permitía la existencia de grupos de oposición porque la oposición sólo podía manifestarse dentro del sistema a través de los Congresos y Comités (Djaziri 1996: 173).

La crisis de Lockerbie y el aislamiento internacional de Libia

Desde 1986 Estados Unidos había impuesto un embargo comercial y financiero en virtud del cual el comercio con Libia está controlado por el Departamento del Tesoro y todos los bienes libios en el país congelados. Gran Bretaña también congeló los bienes libios depositados en el país después de la muerte de un policía británico a las puertas de la embajada libia en Londres (Flores 1998: 26-34). Ese mismo año la Comunidad Europea impuso sanciones a Libia limitando la venta de armamento y la movilidad de sus diplomáticos en territorio europeo.

En el marco del proceso de apertura política y económica iniciado a mediados de los años ochenta Trípoli multiplicó sus iniciativas conciliadoras hacia los países occidentales. A partir de 1988 aceptó la idea de una paz en Oriente Medio. Sus buenos oficios facilitaron la liberación de varios rehenes franceses en Líbano detenidos por el grupo palestino Abu Nidal cuya sede en Libia fue desmantelada. Los lazos con el IRA y otros grupos terroristas comenzaron a ser rotos al tiempo que Trípoli mantuvo una actitud moderada durante la segunda guerra del Golfo en 1991. Estos gestos no modificaron la firme posición norteamericana contra el régimen libio pero sí permitieron a éste mejorar sus relaciones con Francia quien actuó como mediadora intentando normalizar las relaciones Libia-Unión Europea. París facilitó a Trípoli su participación, en octubre de 1990, en la reunión de Argel del "grupo 5+5" que reunía a los 10 países del Mediterráneo Occidental.

El proceso de acercamiento a las cancillerías europeas se vio interrumpido a finales de 1991. En noviembre de ese año el juez francés La Bruguière llegó a la conclusión de que los servicios secretos libios se encontraban detrás del atentado contra el DC-10 de la compañía francesa UTA que había explotado sobre el desierto de Níger en septiembre de 1989 causando 170 muertos. Las ordenes de captura internacionales dictadas contra cuatro ciudadanos libios fue seguida poco tiempo después por el anuncio de los responsables americanos y británicos anunciando la inculpación de otros dos ciudadanos libios en el atentado contra el Boeing de la Panam que explotó sobre la ciudad escocesa de Lockerbie en 1988 causando 270 muertos.

A partir de este momento la administración norteamericana endureció su posición hacia Libia sentando las bases de una estrategia basada en invocar las acusaciones de terrorismo para desacreditar al régimen libio y convencer a la ONU de la necesidad de imponerle mayores sanciones si

no modificaba su política (17). En marzo de 1992 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 748 en la que Libia era calificada de "Estado terrorista" y se le imponía un embargo sobre los suministros militares y los enlaces aéreos en dirección a Libia. En 1993 una nueva resolución reforzó las sanciones introduciendo restricciones a la importación de ciertos equipamientos petroleros y exigió a Trípoli que entregase a las autoridades británicas y francesas a los presuntos responsables de los atentados contra los aviones de la Panam y de la UTA.

Entre 1992 y 1999 el enjuiciamiento de los ciudadanos libios acusados de estar involucrados en el atentado de Lockerbie ha estado en el centro de las relaciones exteriores de Libia. Trípoli se ha negado a entregar a los sospechosos proponiendo desde el principio que éstos fueran juzgados en un país tercero que asegurase la neutralidad del proceso. La inicial negativa británica y norteamericana a aceptar esa contrapropuesta enquistó la cuestión permitiendo que las sanciones internacionales impuestas sobre Libia fueran reconducidas cada seis meses. Estados Unidos ha intentado durante este período, sin éxito, ampliar las sanciones al ámbito de las exportaciones de petróleo intentando agravar las dificultades internas y contribuir a la caída de régimen del coronel Gadafi. En 1996 el presidente Clinton firmó la *Iran and Libya Sanctions Act* promovida por el senador D'Amato en la que se prevenían represalias comerciales contra cualquier empresa del mundo que realizase inversiones superiores a 40 millones de dólares en el desarrollo del sector petrolero y gasístico en Libia o Irán (18). Aunque la Unión Europea rechazó formalmente la aplica-

(17) Un informe del Departamento de Estado de 1991 consideraba a Trípoli como "uno de los principales financiadores del terrorismo internacional". Según este informe Gadafi financiaría las actividades del Frente Popular de Liberación de Palestina del general Ahmed Yibril responsable de varios atentados en Alemania contra intereses norteamericanos. Ese mismo documento acusaba a Libia de financiar a los grupos islamistas palestinos así como de mantener contactos con el IRA y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el partido comunista de Filipinas y otros movimientos sudamericanos (Djaziri 1996: pp. 109-110).

(18) Esta ley obliga al presidente de los Estados Unidos a poner en práctica al menos dos de una lista de seis medidas contra las compañías que inviertan más de 40 millones de dólares en los sectores del petróleo o el gas de Libia o Irán. Entre las medidas contra las empresas infractoras se incluyen: sancionar las importaciones; denegar créditos del banco de importación y exportación de Estados Unidos; rechazar licencias de exportación de mercancías y tecnología reguladas; limitar préstamos bancarios de Estados Unidos a empresas infractoras y prohibir que los bancos que financien esa clase de proyectos negocien títulos del gobierno de Estados Unidos. Véase Instituto de Estudios Estratégicos de Londres "*Las guerras comerciales entre EEUU y la UE*" en *El País*, 22/8/1996, p. 32.

ción extraterritorial de la legislación de Estados Unidos a países terceros Washington confiaba en que los europeos se volvieran más cautelosos a la hora de invertir en la conservación y mejora de la explotación de los recursos petroleros libios (19).

El embargo decretado por la ONU mostró a Libia en toda su crudeza el alcance de su aislamiento en un entorno internacional en transformación tras la desaparición de la Unión Soviética y la consolidación de Estados Unidos como la única gran superpotencia a escala planetaria. Aunque la URSS se mantuvo en un discreto segundo plano durante el bombardeo americano de 1986 la estructura bipolar del sistema internacional permitió entonces a Trípoli intentar utilizar las bazas que ésta ofrecía solicitando su adhesión al Pacto de Varsovia. El nuevo marco internacional de la "postguerra fría" ha impedido a Libia encontrar un contrapeso con el que impedir la imposición de las sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. El embargo, aunque no afectó al sector de los hidrocarburos, vital para la economía libia y para la supervivencia del régimen, reforzó el síndrome de aislamiento internacional y contribuyó al deterioro de la situación socioeconómica en el interior del país.

Desde 1992 el régimen libio ha concentrado sus esfuerzos en intentar levantar el embargo y evitar el reforzamiento de las sanciones propugnado por Estados Unidos. Para alcanzar ese objetivo Trípoli privilegió una estrategia de corte economicista, combinada con gestos políticos puntuales (20), con la que intentaba evitar el alineamiento de la Europa continental con las tesis británicas y norteamericanas. Las estrechas relaciones comerciales con los países europeos que reciben el 90% de las exportaciones libias de petróleo y derivados (21) se vieron intensificadas con importantes inversiones de la *Libyan Arab Foreign Investment Company* (LAFICO) en Alemania, Italia, Suiza y España principalmente en el sector

(19) Véase Ignacio Cembrero, "La Unión Europea advierte a EEUU que sus sanciones contra Irán y Libia son ilegales" en *El País*, 7/1/1996, p. 3.

(20) En 1992 la gran *Yamahiriyya* pierde su carácter popular y socialista en su denominación oficial. Ese mismo año son disueltas las *mazabas*, campamentos de base de la revolución así como el Congreso del Pueblo Árabe. En mayo de 1993 en un intento de seducir al poderoso lobby judío norteamericano un grupo de judíos libios es enviado en peregrinación a Jerusalén (Burgat 1996: 95).

(21) Italia, Alemania, España, Francia y Bélgica son los cinco principales importadores de petróleo libio. Las importaciones de Italia cubren el 51% de sus necesidades, las de Alemania el 13% y las de Francia el 5%. Véase "*Marchés Tropicaux et Méditerranéens*", 16/4/1999, p. 791.

de los hidrocarburos, la industria y las finanzas (22). Con el anuncio de licitaciones internacionales para construir infraestructuras por valor de más de 11.000 millones de dólares después de siete años de embargo Trípoli esperaba conseguir una flexibilización de la posición de aquellos países que aspiraban a obtener los contratos en un momento en el que el fin de las sanciones se veía como próximo (23).

La entrada en vigor en 1996 de la Ley D'Amato y el temor a un reforzamiento de su aislamiento empujó a Libia a multiplicar sus gestos de conciliación intentando mejorar la imagen internacional de la *Yamahiriyya*: se anuncia la reducción del presupuesto del ministerio de defensa, se detiene la construcción de la fábrica de armas químicas de Tarhunah, denunciada por Estados Unidos, se disminuye el apoyo financiero, militar y logístico a diferentes movimientos de liberación en todo el mundo y se establecen relaciones diplomáticas con El Vaticano (Callies de Salies 1998: 136).

El funcionamiento de la Unión del Magreb Árabe creada en 1989 se vio seriamente afectado por la crisis de Lockerbie que junto a la crisis política interna argelina, contribuyó al bloqueo de la organización magrebí y a una reorientación de la política exterior libia hacia el África subsahariana en dónde intenta desempeñar un liderazgo regional basado en su labor mediadora en las disputas interafricanas y en la cooperación económica. Pese a su desencanto hacia el mundo árabe Trípoli se vio obligado a reforzar sus lazos con Túnez y Egipto, que junto con la isla de Chipre se convirtieron en sus puertas de salida al exterior mientras se mantuvo el embargo aéreo sobre el país. La amenaza compartida frente al islamismo contribuyó a reforzar los lazos con estos países, aliados de Washington en

(22) Las inversiones libias en Europa son especialmente relevantes en Alemania donde la *Libyan Oil Invest* (LOI) controla la refinería Holborn de Hamburgo y varias empresas de distribución de aceite de motor y de gasolina en la antigua RDA. Sólo las inversiones en la antigua Alemania del Este fueron estimadas en 1993 en 2.000 millones de dólares. La LOI tiene importantes participaciones en otras refinerías y empresa petroquímicas europeas. La LOI dispone a través de la empresa italiana Tamoil de una importante red de estaciones de servicio en España, Suiza, Italia, Hungría y Francia. La LAFICO ha incrementado sus inversiones en otros sectores a partir de 1992 comprando la cadena de hoteles Metropole al grupo Lohrno y ampliando su participación en la FIAT o en el Banco di Roma. Los beneficios obtenidos de estas inversiones habrían permitido a Libia compensar la reducción de sus ingresos petroleros y atenuar los efectos del embargo. La LAFICO también ha incrementado durante los años 90 su participación en los procesos de privatización de Túnez, Egipto y Marruecos donde controla el 3,5% del capital de la ONA importante holding vinculado a la corona. Véase Djaziri (1996): 112-119, así como Ridha Kéfi, "L'art de contourner un embargo" en *Jeune Afrique*, n.º 1988, (1999), pp. 44-46.

(23) Véase *Jeune Afrique*, n.º 1966, (1996), p. 6.

la región, que actuaron como abogados de la causa libia ante Estados Unidos durante el embargo.

El África subsahariana se consolida a mediados de los noventa como el espacio de sustitución escogido por Libia para romper su aislamiento internacional. Aprovechando las redes que en el siglo pasado había tejido la cofradía Sanusí en el África negra (Martel 1991. 46-47), dónde desempeñó un importante papel en la expansión del Islam, el coronel Gadafi promovió la creación en Trípoli en febrero de 1998 de una Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos (COMESSA) integrada por Libia, Burkina, Mali, Níger, Chad y Sudán (24). Los dirigentes de estos países fueron los primeros que rompieron unilateralmente el embargo tras la cumbre de la OUA de Uagadugu llegando por vía aérea a Trípoli para participar en los actos conmemorativos del 29.º aniversario de la llegada de Gadafi al poder.

El deterioro de la situación socioeconómica y la emergencia de una oposición islamista

Las consecuencias del embargo se hicieron sentir de forma importante en el ámbito interno. El flujo de petrodólares había mantenido hasta entonces a Libia a salvo de los dificultades sociales y económicas que conocían sus vecinos magrebíes mediante una equitativa redistribución de ventajas materiales que había alcanzado a todos los sectores de la población. La prolongación de las sanciones y la reducción de la renta petrolera durante los años noventa originó un deterioro de la vida cotidiana agudizando las contradicciones internas del régimen. Para mantener los equilibrios financieros y evitar el recurso al endeudamiento externo el gobierno puso en marcha una política de reducción del gasto público y contención de las importaciones que contribuyó a reactivar el mercado negro y provocó un aumento vertiginoso de los precios y de la inflación cercana al 600% en 1997. La contención del gasto público provocó un deterioro de los servicios sanitarios y educativos, una reducción del nivel de vida de los funcionarios y un aumento del paro y las desigualdades sociales.

Ante el creciente malestar y descontento de la población urbana el régimen se ve obligado a endurecer sus posiciones combatiendo la

(24) Véase Cherif Ouazani, "L'Union aux forceps" en *Jeune Afrique*, n.º 1936, (1998), pp. 20-23.

corrupción y los brotes de oposición en un intento de reforzar su control sobre la sociedad libia, debilitado tras la pérdida de atribuciones de los Comités Revolucionarios (Mattes 1996: 109). En 1995 se decreta la expulsión de los trabajadores extranjeros en situación irregular y al año siguiente se pone en marcha una campaña de limpieza y moralización pública destinada a acabar con el mercado negro y con un “sector comercial privado parasitario” al que se acusaba de ser el responsable de la corrupción que vivía el país. En mayo de ese mismo año son creados 81 comités de limpieza encargados de erradicar esas nuevas “formas de capitalismo, laxismo e inseguridad” y combatir la corrupción, el tráfico de drogas, el alcohol y el comercio ilícito de divisas (Gobe 1998: 509-511).

El descontento generado por la degradación de la situación socioeconómica ha sido canalizado por los grupos islamistas que han aprovechado ese clima para desafiar al régimen convirtiéndose en la principal amenaza para su continuidad. Su presencia es especialmente activa en la región de Bengasi y en el nordeste del país donde concentran sus acciones armadas a partir de junio de 1995 (25). En 1998 reivindicaban un atentado fallido contra el coronel Gadafi. La represión de los dirigentes islamistas, muchos de ellos veteranos de la guerra de Afganistán, está acompañada por una recurrente descalificación verbal de sus postulados por parte del “Guía de la Revolución” que los acusa de apostatas. Gadafi, sin embargo, ha instrumentalizado el temor que provoca la amenaza islamista en Occidente y en algunos países árabes vecinos presentándose como una barrera contra la expansión del islam radical en sus intentos por ganar respetabilidad internacional con la que obtener el fin de las sanciones (26).

Para combatir el desarrollo de los movimientos islamistas, el régimen libio, igual que ya habían hecho sus vecinos magrebíes y árabes, impulsa una campaña de “reislamización” desde lo alto recuperando el control de las mezquitas y poniendo en vigor en 1994 la *Charia* o ley islámica. Esta

(25) La oposición islamista está fragmentada y ha concentrado sus acciones en la Cirenaica. Se pueden distinguir varios grupos principales: el *Grupo Islámico Combatiente Libio*, dirigido por un veterano de la guerra de Afganistán; el *Movimiento de los Mártires Islámicos* que se presenta como una escisión del anterior; el *Grupo de los partidarios de Dios*. Los contactos entre estos grupos y la también fragmentada oposición laica asentada principalmente en Londres son limitados. Sus diferencias no impiden a la oposición laica en el exterior aplaudir y difundir las acciones islamistas en el interior del país (Gobe 1998: 503-506; García 1999: 23-40).

(26) Véase Cherif Ouazani, “*Kaddafi contre les Afghans*” en *Jeune Afrique*, n.º 1954, (1998), pp. 24-26.

política está acompañada de una intensificación de la represión contra la oposición islamista y laica que alcanza a Mansur el Kikhia, líder de la *Alianza Nacional Libia*, desaparecido en extrañas circunstancias en El Cairo.

El deterioro de la situación en el interior del país ha estado acompañado de un debilitamiento de las alianzas tribales y de un estrechamiento de la base social sobre la que se apoyaba el régimen. El fallido intento de golpe de estado en 1993 de un grupo de oficiales en Bani Walid encabezados por el coronel Garrum de la poderosa tribu de los Warfala apunta en esa dirección (27). La caída en desgracia del coronel Jallud, uno de los oficiales libres que derrocó al rey Idris en 1969 y número dos del régimen hasta 1998, parece mostrar un creciente aislamiento del coronel Gadafi en el interior del país (28). El restablecimiento en 1998 de los castigos colectivos para los cómplices de actos de subversión, violencia armada y desviación religiosa en una sociedad en la que las tribus siguen desempeñando un papel central (Davis 1987) es un indicador de que las tensiones en el nordeste del país no han desaparecido (29).

La reintegración de Libia al sistema internacional

1999 será recordado en Libia por ser el año del levantamiento de las sanciones de la ONU y de la reintegración del país a la sociedad internacional.

En marzo un tribunal francés condenó a cadena perpetua en rebeldía a seis ciudadanos libios por su participación en el atentado contra el avión de UTA y dictó ordenes de captura internacional contra ellos. Entre los condenados se encontraba Abdalla Senusí, ex-número dos de los servicios secretos libios y yerno de Gadafi. Pese a no haber entregado a los condenados la disponibilidad libia a asumir las indemnizaciones civiles decretadas por el tribunal ha levantado los obstáculos a la normalización entre París y Trípoli.

(27) Véase Samir Sobh, "*Kadhafi met fin aux alliances tribales*" en *La Vie Économique*, 17/1/1997, p. 30.

(28) Véase Ridha Kéfi, "*Kaddafi-Jalloud: duel ou duo?*" en *Jeune Afrique*, ná 1962-1963, (1998), pp. 24-27.

(29) Algunos analistas consideran que la contestación y los disturbios en el nordeste del país están conectados "más con la desafección tribal que con el crecimiento de los movimientos islamistas en los países vecinos" (García 1999: 28).

El 5 de abril de 1999 los dos acusados libios en el caso Lockerbie fueron entregados a un representante del secretario general de Naciones Unidas para que fueran juzgados por un tribunal escocés en un país tercero, Holanda, que había cedido una antigua base militar para el desarrollo del proceso. Aunque esta solución había sido propuesta por Libia, el coronel Gadafi exigió antes de entregar a los acusados garantías de que los sospechosos no serían interrogados por responsables de los servicios de seguridad norteamericanos o británicos así como que ninguna otra persona o responsable libia sería llamado a declarar. También exigió el compromiso de que no sería culpado ningún país y de que el juicio sería exclusivamente penal (Rojo 1999: 19). La mediación del presidente sudafricano Nelson Mandela y de Arabia Saudí fue vital para alcanzar un compromiso en el que todas las partes hicieron concesiones.

En virtud del acuerdo alcanzado el Consejo de Seguridad suspendió las sanciones impuestas a Libia en 1992. La Unión Europea siguió los pasos de la ONU levantando sus sanciones pero no Estados Unidos que todavía mantiene en vigor el arsenal de sanciones unilaterales impuestas a Libia desde mediados de los años ochenta.

La flexibilización y el pragmatismo libio entregando a los dos acusados y aceptando que si son condenados cumplan la pena en una cárcel escocesa ha permitido encontrar una vía de solución a un asunto que corría el riesgo de comprometer el futuro del régimen. La aceptación de este compromiso por parte norteamericana no respondía únicamente a la insistencia de sus socios europeos sino que también podría haber estado influida por una reevaluación de su política hacia el continente africano en su conjunto en el que el Coronel Gadafi goza de gran simpatía y apoyos.

El coronel Gadafi ha podido festejar el 30 aniversario de su llegada al poder el 1.º de septiembre de 1999 en un contexto esperanzador, sin la espada de Damocles del embargo internacional. Los ingresos procedentes del petróleo se han incrementado alcanzado un nivel similar al que tuvieron durante la guerra del Golfo gracias a que la reducción de cuotas aprobada en la reunión de la OPEP celebrada en Ginebra en marzo de 1999 ha permitido que el precio del barril duplique su valor alcanzando los 23 dólares en el mes de agosto.

Este clima de bonanza económica ha ido acompañado de una normalización de sus relaciones con los países occidentales. En julio Libia reanuda sus relaciones diplomáticas con Gran Bretaña después de comprometerse a colaborar en la investigación sobre el tiroteo que acabó con la

vida de una policía británica ante la embajada de Libia en Londres. En septiembre es invitada oficialmente por la Unión Europea a sumarse al proceso euromediterráneo iniciado en Barcelona (30). Los enlaces aéreos se han restablecido y la Lybian Airlines ha firmado un acuerdo de cooperación con la compañía Alitalia. Las compañías europeas se preparan para participar en las oportunidades de negocio que el sector de los hidrocarburos y la construcción de infraestructuras ofrecen en los próximos años. La subexplotación de los recursos petroleros a causa de las sanciones hace especialmente atractivo el mercado libio con la salvedad de los límites que las cuotas asignadas por la ONU pudieran establecer. La compañía italiana de hidrocarburos (ENI) y la compañía nacional libia de petróleos han firmado un acuerdo de 5.500 millones de dólares para el desarrollo conjunto de las reservas de petróleo y gas natural que prevé la construcción de un gasoducto que unirá la costa libia con la península italiana a través de Sicilia (31).

El África subsahariana se ha consolidado como el espacio de influencia desde el que Trípoli quiere lavar su mala imagen internacional. Tras el levantamiento de las sanciones la diplomacia libia ha intensificado su actividad multiplicando sus gestiones mediadoras en los numerosos conflictos que sacuden al continente africano. En abril de 1999 el coronel Gadafi consiguió un acuerdo de alto el fuego entre las partes enfrentadas en la República Democrática del Congo que prevé el envío de un contingente de soldados libios para preparar el despliegue de una fuerza africana de paz. Aprovechando este éxito diplomático el coronel Gadafi ha ofrecido su mediación en las guerras civiles de Sudán y Sierra Leona así como en el conflicto que enfrenta a Etiopía con Eritrea (32). En esta misma dirección hay que inscribir la celebración de una cumbre extraordinaria de la OUA en Libia coincidiendo con el 30 aniversario de la revolución para estudiar la reforma y revitalización de la organización panafricana. La reactivación del proceso de integración magrebí y su incorporación al proceso euromediterráneo son las próximas citas en las que la diplomacia libia puede volver a mostrar su voluntad de transformarse en un factor de estabilidad en la región.

A pesar de los cambios introducidos desde 1987 el régimen libio sigue caracterizándose por no tolerar ninguna forma de oposición y por la

(30) Véase *al-Hayat*, 14/9/1999, p. 5.

(31) Véase *Jeune Afrique*, n.º 2017, (1999), pp. 50-51.

(32) Véase "*Marchés Tropicaux et Méditerranéens*", 11/6/1999, p. 1221.

ausencia de un régimen de control institucional efectivo. La libertad de prensa no existe y la situación de los derechos humanos no mejora según el último informe de Amnistía Internacional hecho público en agosto de 1999 (33). El fin del aislamiento diplomático en un momento en el que la recuperación de los ingresos procedentes del petróleo puede acallar el malestar social hace poco probable a corto plazo una profundización en el proceso de liberalización política. La oposición islamista no parece estar en condiciones de derrocar al régimen y la redistribución como antaño de ventajas materiales a la población puede favorecer un restablecimiento de las alianzas con otros grupos tribales.

En el ámbito económico el régimen se verá obligado a encauzar la gestión errática de una economía así como a profundizar en el proceso de liberalización para atraer inversiones extranjeras con las que recuperar el atraso tecnológico en el que se encuentra el sector de los hidrocarburos después de ocho años de sanciones y para desarrollar el negocio del gas natural. En esta línea hay que inscribir el anuncio de una nueva ley de hidrocarburos de corte liberal que abrirá nuevas zonas de prospección y explotación al capital extranjero y con la que el régimen intenta convencer a las grandes compañías norteamericanas para que presionen a la administración estadounidense para conseguir el levantamiento de las sanciones que todavía mantiene sobre Libia. A diferencia de los países europeos Estados Unidos se muestra todavía cauto y continúa exigiendo garantías sobre el abandono del apoyo al terrorismo así como pruebas de que Libia no dispone de armas de destrucción masiva. La prolongación del juicio de Lockerbie le proporciona la justificación para su política de "wait and see".

MAURITANIA

Mauritania, situado en la periferia del mundo árabe, es el único país magrebí que no está bañado por las aguas del mar Mediterráneo y que está a medio camino entre la arabidad y la africanidad.

Desde que Francia le concedió la independencia en 1960 el Estado mauritano ha tenido que hacer frente a la fragilidad de su estructura socio-económica así como a un entorno regional que inicialmente consideró su independencia como una maniobra del colonizador francés para preservar sus intereses económicos en un territorio que durante mucho tiempo

(33) Véase *El País*, 1278/1999, p. 4.

había formado parte del África Occidental Francesa (AOF). La denominación oficial del Estado —República Islámica de Mauritania— muestra la voluntad de subrayar explícitamente el principal rasgo integrador de una población numéricamente reducida —2,3 millones de habitantes—, pero étnicamente compleja. El 70% de sus habitantes son arabo-bereberes, tradicionalmente pastores nómadas y comerciantes, y el 30% restante negro-africanos de varias etnias —toutcouleurs, peuhls, ulofs, soninké— tradicionalmente sedentarios a orillas del río Senegal. Las diferencias entre la comunidad arabo-bereber, que ha monopolizado los centros de decisión política desde la independencia, y las diferentes etnias africanas han sido recurrentes en temas como la educación y la política de arabización, la orientación exterior del Estado —hacia el mundo árabe o hacia el África subsahariana— o la distribución de las nuevas tierras irrigadas en la orilla del río Senegal tras la construcción de presas reguladoras de su cauce. Este último aspecto fue el detonante de los violentos enfrentamientos en 1989 entre la población arabo-bereber y negro-africana en Mauritania y Senegal.

A este débil grado de integración nacional se une la escasez de recursos económicos de un país fundamentalmente desértico. La dependencia exportadora del mineral de hierro y cobre se ha visto limitada los últimos años por el incremento de los ingresos procedentes de la explotación pesquera del litoral atlántico así como por la puesta en explotación de nuevas tierras irrigadas en la llanura del río Senegal.

El Estado mauritano, que no fue reconocido hasta finales de los años 60 ni por Marruecos ni por gran parte de los países árabes (34) concentró sus esfuerzos bajo el impulso del “padre de la nación” y primer presidente, Mujtar Uld Dadah, en intentar crear una conciencia nacional y obtener el reconocimiento de la sociedad internacional.

En sus frontera norte el hecho de que Marruecos reivindicara Mauritania como parte integrante de su territorio contribuyó a que la política exterior mauritana estuviera centrada en intentar crear un estado tapón que le separara geográficamente del reino jerifiano. Es en este contexto geopolítico donde hay que insertar la sorprendente alianza entre los hasta entonces antagonistas —Marruecos y Mauritania— para repartirse el Sáhara Occidental tras la retirada española del territorio en febrero de 1976. Con

(34) Túnez fue el único país que reconoció la independencia de Mauritania en 1960.

la anexión de Río de Oro, la zona sur del antiguo Sáhara español, el régimen mauritano aspiraba a reforzar su seguridad. El desencadenamiento de un imprevisto conflicto armado y el hecho de que el Frente Polisario concentrase entre 1976 y 1978 sus acciones militares sobre Mauritania, más vulnerable que Marruecos, agudizó las contradicciones internas entre la mayoritaria comunidad arabo-bereber, —próxima cultural, lingüística y étnicamente a la población del Sáhara Occidental— y la comunidad negro-africana indiferente ante un oneroso conflicto que amenazaba con poner en peligro los cimientos del Estado.

En este contexto el ejército intervino en 1978 derrocando al presidente Uld Dadah. Desde 1978 se han sucedido varias juntas militares encabezadas por Uld Salek, Uld Buceif, Uld Haidalla y Uld Taya. Pese a sus diferentes orientaciones ideológicas y afinidades regionales todas ellas coincidieron en la necesidad de poner fin a la “aventura saharauí” reconociendo a la República Árabe Saharaui Democrática, buscando una neutralidad en el conflicto.

En su frontera sur las diferencias entre las comunidades arabo-bereberes y negro-africanas estallaron en 1989 en un conflicto entre Senegal y Mauritania con importantes repercusiones en el interior de ambos países. La explotación de las nuevas llanuras irrigadas tras la apertura de dos nuevas presas en el río Senegal fue la causa de violentos enfrentamientos entre ambas comunidades. El saqueo de varias tiendas de arabo-bereberes mauritanos en Dakar y otras ciudades senegalesas provocó una violenta reacción en el interior de Mauritania contra los senegaleses asentados en el país así como contra aquellos sectores negro-africanos más críticos a la presencia arabo-bereber en la gestión de los asuntos políticos del país. A la expulsión de los ciudadanos senegaleses del país se unió la de aquellos ciudadanos mauritanos que habían obtenido la nacionalidad después de 1966. Entre las víctimas de esta “purga étnica” se encontraban importantes funcionarios, militares y universitarios así como poblaciones enteras del valle del río Senegal. El retorno de estos expulsados se ha convertido desde entonces en un elemento de fricción en las relaciones con Senegal y de inestabilidad en el interior del país (Marchesin 1996: 332-335).

Mauritania continua, cuarenta años después de su independencia, intentando consolidar su articulación como Estado mejorando la relaciones intercomunitarias. Durante los años 90 esas tensiones siguen presentes no sólo en la fragmentación del campo político y en las luchas clánicas por el poder sino también en temas como la política educativa o la arabización.

Igual que el resto de países magrebíes Mauritania comienza a principios de la década de los años 90 un proceso de apertura política caracterizado por el tránsito hacia el pluripartidismo. Este proceso lanzado oficialmente en 1991 mediante la elaboración de una nueva Constitución que consagraba el retorno a la vida parlamentaria respondía tanto a la necesidad del régimen militar del presidente Uld Taya por mejorar su imagen internacional tras la guerra del Golfo como a las presiones internas del país.

El proceso de apertura política que ha permitido la creación de 22 partidos políticos, la instauración de la libertad de prensa y la celebración periódica de elecciones legislativas y presidenciales no se ha visto acompañada de la emergencia de una oposición fuerte con capacidad de alternancia. La vida política está monopolizada por el partido Republicano Democrático y Social (PRDS) próximo al coronel Uld Taya quien fue elegido presidente en 1992 con el 66% de los votos en unas elecciones disputadas en las que su oponente Ahmed Uld Dadah, líder de la Unión de Fuerzas Democráticas (UFD), obtuvo el 33% de los sufragios canalizando el apoyo del resto de fuerzas de oposición. Las elecciones presidenciales de 1997 en las que fue reelegido Uld Taya fueron boicoteadas por la oposición.

En las elecciones legislativas el PRSD ha obtenido la práctica totalidad de los escaños en el Parlamento. En 1992 la oposición boicoteó los comicios. En 1996, sin embargo, el proceso electoral fue competitivo pero la legislación electoral y la desunión de la oposición contribuyeron a que la oposición obtuviera únicamente un escaño.

BIBLIOGRAFÍA

- ABDESSALAM, BELAID: "*Le gaz algérien, stratégies et enjeux*". Bouchene, Argel 1989.
- ADDI, LAHOUARI: "*L'Algérie et la démocratie*". La Découverte, París 1994.
- "*Les mutations de la société algérienne*". La Découverte, París 1999.
- AMINA OUEZAR, IMAN: "*El reajuste político en Argelia*" en Meridiano CERI, n.º 27, (1999), pp. 20-23.
- AYUBI, NAZIH: "*Política y sociedad en Oriente Próximo: la hipertrofia del estado árabe*". Edicions Bellaterra, Barcelona 1998.
- BENRABAH, MOHAMED: "*Langue et pouvoir en Algérie*". Histoire d'un traumatisme linguistique, Séguier, París 1999.
- BESSIS, JULIETTE: "*La Libye contemporaine*". L'Harmattan, París 1986.
- BRAHIMI, ABDELHAMID: "*L'économie algérienne*". Dahlab, Argel 1991.
- BURGAT, FRAÇOIS: "*La mobilisation islamiste et les élections algériennes du 12 juin de 1990*" en Maghreb-Machrek, n.º 129, (1990), pp.5-22. Y LARONDE, ANDRÉ: "*La Libye*". Que sais-je?, n.º 1634, Presses Universitaires de France, París 1996.

- CALLIES DE SALIES, BRUNO: "*Libye: évolution favorable*" en Défense Nationale, abril 1998, pp. 130-145.
- DAGUEZAN, JEAN-FRANÇOIS: "*Le dernier rempart? Forces armées et politiques de défense au Maghreb*". Publisud, Paris 1998.
- DAHMANI, AHMED: "*L'Algérie à l'épreuve: économie politique des reformes 1980-1997*". L'Harmattan, Paris 1999.
- DAURE-SERFATY, CHRISTINE: L'Harmattan, Paris 1993.
- DAVIS, JOHN: "*Le système libyen: les tribus et la revolution*". Presses Universitaires de France, Paris 1987.
- DESRUES, THIERRY Y MOYANO, EDUARDO: "*Cambio, gobernabilidad y crisis en el Magreb*". CSIC, Córdoba 1997.
- DJAZIRI, MONCEF: "*État et société en Libye*". LiHarmattan, Paris 1996.
- DJERBAL, DAHO: "Les élections législatives de 5 juin 1997 en Algérie: enjeux politiques, logiques et acteurs" en *Maghreb-Machrek*, n.º 157, (1997), pp. 149-180.
- ETIENNE, BRUNO: "*El clientelismo en Argelia*" en Gellner Ernest y otros, "*Patronos y clientes en las sociedades mediterráneas*". Júcar Universidad, Madrid 1986, pp. 273-295.
- FELIÚ, LAURA: "*El movimiento de los derechos humanos en Túnez en un contexto de cambio político y de emergencia de la sociedad civil*" en Desrues, THIERRY Y MOYANO, EDUARDO: "*Cambio, gobernabilidad y crisis en el Magreb*", CSIC, Córdoba 1997, pp. 141-167.
- FONTAINE, JEAN: "*Les élections locales algériennes du 12 juin 1990: approche statistique et géographique*" en *Maghreb-Machrek*, n.º 129, (1990), pp. 124-140.
 "Les élections législatives algériennes. Résultats du premier tour" en *Maghreb-Machrek*, n.º 135, (1992), pp. 155-165.
 "Les élections présidentielles en Algérie" en *Maghreb-Machrek*, n.º 151, (1996), pp. 107-118.
- FLORES, CHARLES: "*Les ombres de Lockerbie: une analyse des relations anglo-libyennes*". Editions EPO, Bruselas 1998.
- GARCÍA, LEOPOLDO: "*El Islamismo y la oposición en Libia*". Madrid 1999.
- GHADAFI, MUAMMAR: "*El libro verde*". Public Establishment for publishing, advertising and distribution, Trípoli 1978.
- GOBE, ÉRIC: "*Libye: chronique intérieure*" en *Annuaire de l'Afrique du Nord* 1996, CNRS. Paris 1998, pp. 503-515.
- GOURDON, HUBERT: "*La Constitution algérienne du 28 novembre de 1996*" en *Maghreb-Machrek*, n.º 156, (1996), pp. 36-48.
- GRIMAUD, NICOLE: "*La politique extérieure de l'Algérie*". Karthala, Paris 1984.
 "La spécificité tunisienne en question" en *Politique étrangère*, n.º 2, (1995), pp. 389-402.
- HADJADJ, DJILLALI: "*Corruption et démocratie en Algérie*". La dispute, Paris 1999.
- HERNANDO DE LARRAMENDI, MIGUEL: "*Chronique internationale 1991*" en *Annuaire de l'Afrique du Nord*, CNRS, Paris 1992, pp. 478-548.
 "Frentismo electoral y democracia en Túnez (1959-1989)" en López García, Bernabé y otros (eds.), "*Elecciones, participación y transiciones políticas en el Norte de África*". Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Madrid 1991, pp. 295-319.
- LÓPEZ GARCÍA, BERNABÉ: "*Sistemas políticos del Magreb actual*". MAPFRE, Madrid 1996.

- "*La política exterior de Marruecos*". Editorial MAPFRE, Madrid 1997.
- "*Luces y sombras del modelo tunecino*", Meridiano CERI, n.º 25, (1999), pp. 24-28.
- KAPIL, ARUN: "*Les partis islamistes en Algérie: éléments de presentation*" en *Maghreb-Machrek*, n.º 133, (1991) pp. 103-111.
- LASSASSI, ASSASSI: "Non-Alignment and Algerian Foreign Policy". Aldershot 1988.
- LAMCHICHI, ABDERRAHIM: "Le Maghreb face à l'islamisme". L'Harmattan, Paris 1997.
- LEVEAU, RÉMY: "Le sabre et le turban. L'avenir du Maghreb". François Bourin 1993.
- LÓPEZ GARCÍA, BERNABÉ Y FERNÁNDEZ SUZOR, CECILIA: "*Introducción a los regímenes y Constituciones árabes*". Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1985.
- MARTÍN MUÑOZ, GEMA; HERNANDO DE LARRAMENDI, MIGUEL: "*Elecciones, participación y transiciones políticas en el Norte de África*". Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Madrid 1991.
- MARTEL, ANDRÉ: "*La Libye 1835-1990: essai de géopolitique historique*". Presses Universitaires de France, Paris 1991.
- MARCHESIN, PHILIPPE: "*Tribus, ethnies et pouvoir en Mauritanie*". Karthala, Paris 1992.
- "*El sistema político mauritano*" en Hernando de Larramendi, Miguel y López García, Bernabé, "*Sistemas políticos del Magreb actual*". Editorial MAPFRE, Madrid 1996, pp. 284-348.
- MARTÍN MUÑOZ, GEMA: "*Violencia y elecciones en Argelia. Los comicios presidenciales del 15 de abril de 1999*" en *Nova Africa*, n.º 5, (1999), pp. 57-68.
- MARTINEZ, LUIS: "*La guerre civile en Algérie*". Karthala, Paris 1998.
- MATTES, HANSPETER: "*The rise and fall of the Revolutionary Committees*" en Vandewalle, Dirk, "*Qadhafi's Libya: 1969 to 1994*". Mac Millan Londres 1995, pp. 89-112.
- "*Mauritanie, Un tournant démocratique?*", en *Politique Africaine*, n.º 55, 1994.
- METREF, AREZKI: "*La question berbère: quand le politique capture l'identitaire*" en *Maghreb-Machrek*, n.º 154, (1996), pp. 25-30.
- MURPHY, EMMA C: "*Ten years on Ben Ali's Tunisia*" en *Mediterranean politics*, Vol 2, N.º 3 (1997), pp. 114-122.
- MOROY, FRANCK: "Tunisie: chronique intérieure" en *Annuaire de l'Afrique du Nord* 1996, CNRS, Paris 1998, pp. 671-690.
- QUANDT, WILLIAM B.: "Société et pouvoir en Algérie: la décennie des ruptures". Casbah editions, Argel 1999.
- ROJO, PEDRO: "*Lockerbie, cambios y perspectivas*" en *Meridiano CERI*, n.º 27, (1999), pp. 15-19.
- SAFIR, NADJI: "*Origines et dimensions internationales de la crise*" en Manceron, Gilles: "*Algérie: comprendre la crise*". Editions Complexe, Bruselas 1996, pp. 139-151.
- SOUDAN, FRANÇOIS: "*Le marabout et le colonel: la Mauritanie de Ould Daddah à Ould Taya*". Jalivres, Paris 1992.
- VANDEWALLE, DIRK: (Ed.), "*Qadhafi's Libya: 1969 to 1994*". Mac Millan Londres 1995.
- "*Libia*" en Hernando de Larramendi, Miguel y López García, Bernabé (eds.). Colección El Magreb. Editorial Mapfre, Madrid 1996, pp.225-282.
- YEFSAH, ABDELKADER: "*Le processus de légitimation du pouvoir militaire et la constitution de l'État en Algérie*". Éditions Anthropos, Paris 1982.
- ZAMITI, KHALIL: "*Le Fonds de Solidarité Nationale: pour une approche sociologique du politique*" en *Annuaire de l'Afrique du Nord* 1996. Paris, CNRS, 1998, pp. 705-712.